



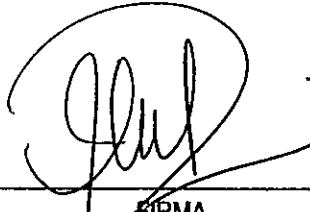
COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA SELECCIÓN DE MAGISTRADOS  
A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
2019-2024

EXP 22

3

**FICHA DE PRESENTACIÓN DE IMPEDIMENTOS  
DE PERSONAS INDIVIDUALES O JURÍDICAS**

Fecha: 3 de febrero de 2020 Número de Expediente: -22-  
Nombres y Apellidos del Postulante: Vitalina Orellana y Orellana  
Denunciante: Helen Beatriz Mack Chang DPI: 1852 72533 1101  
Institución: FUNDACIÓN MYRNA MACK  
Representante Legal: Helen Beatriz Mack Chang  
Dirección Física: 2da calle 15-15 zona 13,  
municipio de Guatemala, depto. de Guatemala  
Dirección Electrónica: www.myrnamack.org.gt  
Teléfono (s): 2414 - 0500

  
FIRMA

**NOTA IMPORTANTE:**

Adjuntar copia legible del DPI con fotografía clara.

Fotocopia legalizada de nombramiento de Representante Legal.

10

2



**SEÑALAMIENTO DE IMPEDIMENTO  
A LA POSTULACIÓN DE  
VITALINA ORELLANA Y ORELLANA  
COMO MAGISTRADO A LA  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**SEÑORES DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN DE CANDIDATOS A  
MAGISTRADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**

**HELEN BEATRIZ MACK CHANG**, de sesenta y ocho años de edad, ejecutiva, soltera, guatemalteca, de este domicilio y vecindad, me identifico con Documento Personal de Identificación con código único de identificación número 1852 72533 1101 extendido por el Registro Nacional de las Personas, comparezco en mi calidad de presidente de la junta directiva y representante legal de la **Fundación Myrna Mack**, calidad que acredito con el acta notarial de mi nombramiento, autorizada en la Ciudad de Guatemala, el 21 de febrero de 2019, nombramiento que está debidamente inscrito en el Registro de Personas Jurídicas bajo la partida 332, folio 332, del libro 59 de nombramientos del Registro de las Personas Jurídicas del Ministerio de Gobernación; señalo como lugar para recibir notificaciones la segunda calle quince guion quince de la zona trece de la ciudad de Guatemala. Respetuosamente comparezco ante ustedes, y al efecto

**EXPONGO:**

**OBJETO DE MI COMPARECENCIA:** Por este medio señalo de impedimento la postulación de **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** a magistrada de la Corte Suprema de Justicia, ya que, durante su actuación jurisdiccional, como Magistrado de dicha Corte, en la resolución del antejuicio identificado como 71-2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, declaró junto con otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia : “D NO HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA en contra de FELIPE ALEJOS LORENZANA, diputado del Congreso de la República de Guatemala (...)”. Afirmó el postulante objetado que, en la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público “no se acreditó fehacientemente que el número 40009116 estuviera asignado al diputado Alejos. El

postulante objetado afirma además que, según el reporte del operador telefónico, la línea 40009116 se encuentra a nombre de Luis Antonio Yaquian, de la entidad de Enlace de Asuntos Estatales. Asuntos Corporativos. El planteamiento en cuestión resulta falaz, pues, basta con leer someramente el texto del documento en el que aparece la firma de Luis Antonio Yaquian, para dejar en claro que se trata del ejecutivo de la entidad mercantil que presta servicios de telefonía, que acredita que la línea telefónica, inactiva desde 2016, ha tenido como usuario a Felipe Alejos Lorenzana. En consecuencia, “Enlace de Asuntos Estatales Asuntos Corporativos” no es una entidad, como lo argumenta el postulante Orellana y Orellana, sino es simplemente el cargo que ocupa Luis Antonio Yaquian. Por lo indicado se sostiene que la resolución proferida obedece a argumentos falaces.

El postulante objetado insiste (página 16) que no se demostró que existiera autorización judicial para la extracción forense del número 40009116. Sin embargo, las comunicaciones corresponden al teléfono de Giovani Marroquín Navas, a quien se capturó en 2015 y se acusó dentro del caso denominado La línea. Supuestamente Marroquín promovía ante ex funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria la agilización de expedientes de devolución de crédito fiscal, a cambio de un porcentaje de dinero que se esperaba obtener. Según los datos obtenidos a través de la extracción forense respectiva, la cual fue previamente autorizada por el Juzgado B de mayor riesgo, de los dispositivos electrónicos que incautaron a Marroquín tras su captura, pudo establecerse la posible participación del diputado Felipe Alejos Lorenzana en el entramado de tráfico de influencias.

En el presente caso la postulante VITALINA ORELLANA Y ORELLANA decidió actuar en abuso de autoridad, pues, a la Corte Suprema de Justicia únicamente le está atribuido establecer la existencia de indicios que hagan presumible la necesidad de formación de causa penal. En consecuencia, no debe verificar aspectos procesales que son competencia del juez o tribunal respectivo al momento de que sea sometido a su conocimiento durante el desarrollo del correspondiente proceso penal. El antejuicio no es un proceso penal, sino, más bien, una prerrogativa aneja a la función o dignidad pública que se ejerce. Además, la propia Corte Suprema de Justicia ha señalado que el contenido del informe del juez pesquisador no puede ser vinculante para la decisión que se llegue a tomar. Por estas circunstancias se considera que el objetado asumió una conducta contraria a la normatividad pertinente aplicable por lo que debe actuarse en consecuencia.

## **1. DE LAS CALIDADES REQUERIDAS PARA SER MAGISTRADO**

La comisión de postulación definió el perfil para optar al cargo (magistrados a la Corte Suprema de Justicia y magistrados de la Sala de la Corte de Apelaciones) que debe satisfacerse por cada uno de los postulantes dividiéndolo en: 1. Requisitos constitucionales (art. 207 de la Constitución Política de la República). 2. Requisitos éticos. 3. Requisitos académicos. 4. Requisitos profesionales. 5. Requisitos de proyección humana.

En cuanto a los requisitos éticos a evaluar, por las consideraciones que se expondrán más adelante, NO SE DEBE ATRIBUIR ESTA CALIDAD A VITALINA ORELLANA Y ORELLANA, y tomando cuenta que no se puede separar la ética de la honorabilidad, puesto que dicha calidad se tiene o no por la persona, sin que al respecto existan valoraciones intermedias, se concluye que, dados los antecedentes de la postulante, no posee la mencionada calidad.

## **2. ELEMENTOS PARA LA COMPROBACIÓN DE LA HONORABILIDAD**

La Corte de Constitucionalidad ha elaborado un Corpus doctrinal<sup>1</sup> que orienta el actuar del poder público, cuando se le exija – para la elección, nominación, selección u otro procedimiento similar- valorar el aspecto reconocida honorabilidad, sobre el que la Corte se ha pronunciado con anterioridad en cuanto a considerarse éste un requerimiento comprobable mediante una serie de elementos.

La comprobación de la honorabilidad del postulante deberá hacerse a través de la verificación de la concurrencia de los siguientes elementos:

1. Acreditaciones; consistente en la presentación de documentos o certificaciones.
2. Criterios sociales; integrados por la buena conducta profesional, la estima gremial, el reconocimiento del foro público, el decoro profesional, entre otros.
3. Repercusiones en el actuar; que se manifiestan tanto en lo profesional, en la judicatura u otro servicio prestado desde la administración pública o en cualquier otro ramo, entendiéndose como tal no solo su ejercicio profesional, sino también las actividades personales, comerciales o de cualquier otra índole que resultaren incompatibles con el ejercicio de la función pública.
4. Criterios de organismos internacionales; “Que conforme los Principios Básicos Relativos a la Independencia Judicial, reconocidos por la Asamblea General de las Naciones Unidas, adoptados por el Séptimo Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán del veintiséis de agosto al seis de septiembre de mil novecientos ochenta y cinco, y confirmados por la Asamblea General en sus resoluciones 40/32 de veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, y 40/146 de trece de diciembre de mil novecientos ochenta y cinco, dicha independencia implica el reconocimiento y las garantías adecuadas para que: “Los jueces resuelvan los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumento

---

<sup>1</sup> Corte de Constitucionalidad, expediente de inconstitucionalidad 942-2010, sentencia de fecha 24 de agosto de 2010. La Corte también se ha pronunciado sobre la reconocida honorabilidad en los siguientes expedientes: 273-91; 205-94, 3690-2009; 1167-2014 y 4639-2014.

internacional que forma parte del bloque de constitucionalidad, garantiza la inmunidad e independencia de los jueces, así como el acceso de toda persona a un juez o tribunal competente, independiente e imparcial”.

5. Legislación ordinaria; “Por su parte, el primer considerando de la Ley de la Carrera Judicial establece: “Que una de las grandes debilidades estructurales del Estado guatemalteco residen en el sistema de justicia, que es uno de los servicios públicos esenciales; que su reforma y modernización debe dirigirse a impedir que éste genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción y, al mismo tiempo, se revierta la ineficacia, se garantice el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su conjunto y modernización”; y en ese orden de ideas, el artículo 70 de la Ley del Organismo Judicial establece como prohibiciones para los jueces y magistrados que integran dicho Organismo del Estado, el hecho de tener negocios o ejercer oficios que sean incompatibles con el decoro de su profesión”. y

6. criterios complementarios La exégesis anterior, sienta criterios para lo que en diversos ámbitos se denomina “Guía de buenas prácticas” a favor de la transparencia y con ello, ante futuros procesos de elección de diversos funcionarios públicos (no sólo por parte del Congreso de la República, sino también por Poderes del Estado o entidades gubernamentales), se cuente con criterios que orienten su actuar en el futuro, tal y como estimó la Corte de Constitucionalidad en el Expediente 2409-2009, sentencia de fecha veinticinco de noviembre de dos mil nueve, al considerar: “debido a las especiales circunstancias que lo generaron y eventualmente podrían nuevamente acaecer, esta sentencia debe clarificar el cómo del actuar público”.

En el caso de marras, los actos realizados por VITALINA ORELLANA Y ORELLANA en conjunto con otros magistrados que integraron la Corte Suprema de Justicia en la resolución del antejuicio identificado como 71-2018 de fecha 21 de noviembre de 2018, produjeron repercusiones, pues concretaron una situación de manifiesta impunidad y la imposibilidad material de que el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales del orden común, pudieran proceder en el marco de sus atribuciones a dilucidar la situación jurídica de Alejos.

Estos extremos pueden corroborarse haciendo las solicitudes correspondientes de la siguiente documentación:

1. Expediente de antejuicio interpuesto por el Ministerio Público en contra número 71-2018 de la Corte Suprema de Justicia, mismo que puede ser solicitado a la Corte Suprema de Justicia, por obrar en su poder.
2. Expediente de amparo en única instancia identificado con el número 6224-2018 que se encuentra en la Corte de Constitucionalidad, lugar donde puede ser habido o en la propia Fiscalía Especial contra la Impunidad.

3. Documento de fecha 27 de febrero de 2017 dirigido a Victor Manuel Ávila Rodríguez, auxiliar fiscal de la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público, y firmado por Luis Antonio Yaquian en calidad de enlace de asuntos estatales, asuntos corporativos, copia del cual podrá ser solicitada a la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público.

### 3. DE LOS PRECEPTOS ETICOS APLICABLES

La presente objeción también encuentra su asidero en la actuación jurisdiccional de VITALINA ORELLANA Y ORELLANA, la cual ha conculcado los más elementales principios del debido proceso, contemplado en el artículo 12 de la Constitución Política de la República, valores y principios éticos, aunado a que dicho proceder entraña la violación del máximo valor que informa el trabajo jurisdiccional como lo es la consecución de la Justicia.

La Corte IDH ha opinado respecto al artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que el mismo reconoce el llamado "debido proceso legal", que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial<sup>2</sup>.

En este contexto la labor del jurista debe dirigirse a conseguir la justa, pacífica, armónica y funcional convivencia, del conglomerado social, y debe prestarse ajustado a claras normas éticas y morales, que exigen de cada juez, honor, decoro, rectitud, respeto y dignidad en todas y cada una de sus actuaciones, actitud profesional que requiere una conducta recta y ejemplar, pues debe ser un paradigma de honestidad<sup>3</sup>.

La rectitud es un valor sinónimo de la justicia, que exige del profesional el ejercicio de la igualdad, la equidad y la imparcialidad en sus labores<sup>4</sup>. Al confrontar el desempeño del postulante objetado en el antejuicio a Luis Felipe Alejos, con los parámetros éticos a los que se ha hecho referencia, se puede inferir que incurrió en actitudes que riñen directamente con los mismos.

A lo expuesto se puede agregar que el magistrado postulante, faltó a los preceptos incluidos en el **Acuerdo 22-2013** de la Corte Suprema de Justicia, **Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial**, en especial en lo que respecta a los artículos e incisos que a continuación se detallan:

**Artículo 4. inciso d. Justicia.** Dar y reconocer a cada persona lo que le corresponde o pertenece. El personal del Organismo Judicial debe: d) Impartir justicia, resolviendo con estricto apego y cumplimiento al ordenamiento jurídico y garantizar que sus decisiones

---

<sup>2</sup> Corte Interamericana de Derechos humanos. Opinión consultiva oc-9/87 del 6 de octubre de 1987, parr. 28.

<sup>3</sup> Tercer considerando del Código de Ética Profesional.

<sup>4</sup> Ibarra, Guadalupe. Ética y valores profesionales. Disponible en GI Rosales - Reencuentro, 2007 - redalyc.uaemex.mx, consultado el 11 de marzo de 2013.

sean justas y sustentadas en derecho. Inciso f) Ser imparciales y evitar influencias de otras personas, grupos o partidos políticos, o de ser influido por el clamor públicos, por consideraciones de popularidad o notoriedad o por motivaciones impropias. Inciso g) Exhibir una conducta neutral, evitando todo tipo de comportamiento que pueda reflejar favoritismo, predisposición o perjuicio. **Artículo 5. Independencia.** Ejercer funciones asignadas sin intervención ajena ni influencia real o aparente de factores externos. El personal del Organismo Judicial debe: a) Garantizar a las y los ciudadanos el derecho a ser juzgados bajo parámetros establecidos en el marco de constitucionalidad y legalidad, impartiendo justicia libremente, alejado de toda motivación ajena que influya en su decisión. **Artículo 6. Integridad.** Actuar con rectitud y dignidad en todos los aspectos de la vida. El personal del Organismo Judicial debe: b) Actuar dentro de las normas de comportamiento ético para generar confianza ciudadana hacia el Organismo Judicial. **Artículo 8. Credibilidad.** Actuar en el cumplimiento de las normas y las leyes, generando confianza de las personas usuarias y de la población, en lo individual y hacia la institución. El personal del Organismo Judicial debe: b) Evitar que pueda surgir cualquier duda sobre la legitimidad de sus acciones, ingresos o su situación patrimonial. c) Comportarse de tal manera que, quien observa sensatamente, perciba un actuar legítimo, regular y correcto. **Artículo 12. Prudencia.** Considerar los efectos que pueden producir nuestros actos, conduciéndose con cautela moderación y sensatez en la toma de decisiones. El personal del Organismo Judicial debe: c) Analizar las distintas opciones que ofrece el deber ser, valorar las diferentes consecuencias que traerán aparejadas cada una de ella y emitir juicios objetivos. **Artículo 16. Deberes.** El personal del Organismo Judicial, en el ámbito de su competencia, debe: a) Mantener y promover los estándares de conducta definidos en la presente normativa y en la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes; d) Observar las garantías constitucionales que aseguren el debido proceso. **Artículo 26.** El personal del Organismo Judicial debe comprometerse de manera expresa con la misión, visión y normas éticas que rigen a la Institución, entendiendo que su cumplimiento es obligatorio y que con ello contribuye a brindar un servicio de justicia de calidad, firmando para el efecto una carta de conocimiento y compromiso ante la Gerencia de Recursos Humanos.

Por ello lo contundente de mi afirmación de que VITALINA ORELLANA Y ORELLANA, durante su desempeño como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, actuó contrario a la exigencia ética contemplada en la normatividad deontológica aplicable, asimismo, en contra de los postulados números 1, 3, 5, 6, 7 y 8 contemplados por el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala

Los postulados aludidos se refieren a: probidad, prudencia, independencia, veracidad, juridicidad y eficiencia. En cuanto a la probidad de la postulante, se puede sustentar que la misma se vio comprometida si se considera que el trabajo de la judicatura debe evidenciar siempre rectitud, honradez e integridad de pensamiento y acción, lo que debe manifestarse especialmente en el irrestricto respeto a las garantías constitucionales que informan el



proceso penal. Al avalar la sentencia de segundo grado referida párrafos arriba, se aleja del postulado referido. De ahí que su actuación no pueda calificarse de prudente, ni mucho menos que en su ejercicio haya tenido presente su independencia. En semejante sentido afrenta a la veracidad, puesto que con sus actos facilitó el propósito espurio de los accionantes, en menoscabo de la verdad que finalmente fue acreditada. En este orden de ideas, se sostiene que faltó a la juridicidad y a la eficiencia que deben caracterizar el desempeño de la judicatura.

Asimismo, con la actitud demostrada vulneró el precepto de imparcialidad estatuido en el artículo 30 del relacionado cuerpo deontológico.

Analizando los hechos expuestos resulta notorio que la postulante, cae dentro del denominado litigio malicioso, con lo que, en consecuencia, se aparta de los postulados éticos, contenidos en las normas deontológicas que sirven de sustento al presente veto.

#### **4. CONCLUSIONES:**

Es importante tomar en cuenta que la postulante no reúne las calidades requeridas por la ley para optar al cargo de magistrado, toda vez que quedó demostrado que su desempeño profesional en el caso señalado demostró falta de independencia judicial e incluso desconocimiento de elementales principios éticos aplicables. Prueba de ello lo constituyó la resolución del antejuicio identificado como 71-2018 de fecha 21 de noviembre de 2018.

Al tomar la decisión referida en la presente manifestación de impedimento, se actuó en detrimento de la justicia, por lo que cabe calificar dicha situación como una repercusión negativa que favorece la impunidad y socaba el trabajo encomendado constitucionalmente al Ministerio Público.

#### **5. POR TANTO:**

VITALINA ORELLANA Y ORELLANA, por todas las consideraciones vertidas NO ES PERSONA IDÓNEA para optar al cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia porque ha faltado a las calidades requeridas por la Constitución Política de la República de Guatemala, las Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial y el Código de Ética Profesional del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, careciendo así de idoneidad por faltas a la ética, a la Reconocida Honorabilidad y los factores académicos necesarios para el ejercicio del cargo de Magistrada.

#### **6. FUNDAMENTO DE DERECHO:**

*Constitución Política de la República de Guatemala: Artículo 28. Derecho de petición (Constitución Política de la República de Guatemala). Los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir, individual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley.*

*En materia administrativa el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrá exceder de treinta días.*

*En materia fiscal, para impugnar resoluciones administrativas en los expedientes que se*

*originen en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente el pago previo del impuesto o garantía alguna.*

**Ley de Comisiones de Postulación: Artículo 20. Publicación de nombres de aspirantes.** Las Comisiones de Postulación darán a conocer los nombres de los participantes que reúnan los requisitos de Ley, por medio de una publicación que efectúen en el diario oficial y en dos de mayor circulación del país, para que cualquier persona que conozca sobre algún impedimento, lo haga saber por escrito a dicha Comisión.

En virtud de lo expuesto en el presente pronunciamiento y veto, a la Comisión de Postulación, respetuosamente,

#### **7. SOLICITO:**

1) Que se tenga por presentado mi **SEÑALAMIENTO DE IMPEDIMENTO A LA POSTULACIÓN DE VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** para el cargo de Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, con la finalidad de que no sea considerado dentro de la lista de nombres que se remita al Congreso de la República por haber incumplido sus deberes éticos a través de la resolución de fecha 21 de noviembre de 2018 dentro del antejuicio identificado como 71-2018; y por no cumplir con el requisito constitucional de reconocida honorabilidad.

2) Se solicite la información de la siguiente documentación al Ministerio Público: **2.1** Expediente de antejuicio interpuesto por el Ministerio Público en contra número 71-2018 de la Corte Suprema de Justicia, mismo que puede ser solicitado a la Corte Suprema de Justicia, por obrar en su poder. **2.2** Expediente de amparo en única instancia identificado con el número 6224-2018 que se encuentra en la Corte de Constitucionalidad, lugar donde puede ser habido o en la propia Fiscalía Especial contra la Impunidad. **2.3** Documento de fecha 27 de febrero de 2017 dirigido a Victor Manuel Ávila Rodríguez, auxiliar fiscal de la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público, y firmado por Luis Antonio Yaquian en calidad de enlace de asuntos estatales, asuntos corporativos, copia del cual podrá ser solicitada a la Fiscalía de Sección de Delitos Económicos del Ministerio Público.

Ciudad de Guatemala, 3 de febrero de 2020.



**Helen Beatriz Mack Chang**  
**Representante Legal de Fundación Myrna Mack**





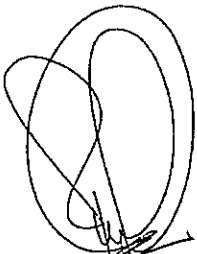


REGISTRO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE NOMBRAMIENTOS

Con base al acta notarial autorizada en la ciudad de Guatemala, en fecha 21 de Febrero 2019, por el Notario JOSÉ ALBERTO BARRERA SANTOS, se inscribe en este Registro bajo la partida número 332, folio 332, del libro 59 de Nombramientos, el nombramiento de HELEN BEATRIZ MACK CHANG, como PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad FUNDACION MYRNA MACK, inscrita en el Registro Civil de la Municipalidad de Guatemala, departamento de Guatemala, bajo la partida 105, folio 357 del libro 43 de Personas Jurídicas. Plazo del Cargo: Inicia el 26/11/2018 y vence el 25/11/2021. Guatemala, 5 de Marzo 2019. Expediente Número 5121021988964. Arancel según Acuerdo Gubernativo Número 404-2011, Artículo 2: Q.75.00.

El Registro del presente documento no prejuzga sobre el contenido ni validez del mismo, ni del original que reproduce y no convalida hechos o actos nulos o ilícitos.



  
Lcda. Jennie Alejandra Tello Rosales  
Registradora  
Registro de las Personas Jurídicas  
Ministerio de Gobernación



Registro de las Personas Jurídicas

5ª. avenida 10-53, zona 1, ciudad de Guatemala, PBX.: 2413 - 8888, exts.: 5614 y 5615

[www.mingob.gob.gt/rpj](http://www.mingob.gob.gt/rpj)

Impreso el: 07 Mar 2019 09:10:11

José Alberto Barrera Santos  
Abogado y Notario

Gobernación Byron Humberto Barrientos Díaz. **SEGUNDO:** En la escritura pública número veinticinco (25) autorizada por la notaria Gladys Annabella Morfin Mansilla, citada en el punto anterior, en la cláusula SEGUNDA, los artículos vigésimo sexto, vigésimo séptimo, vigésimo octavo, trigésimo segundo y trigésimo tercero de los estatutos de la "FUNDACIÓN MYRNA MACK", que copiados textualmente en su parte conducente dicen: "...ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva es el órgano coordinador, director y ejecutor de "FUNDACIÓN", encargado de velar por la buena conducción de la Institución. Se integra con los miembros de "LA FUNDACION", en los siguientes cargos: Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría, Tesorería, dos Vocales. ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: ELECCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA: El sistema de elección para integrar la Junta Directiva será por cargos. La votación se hará en forma nominal o como lo decida la Asamblea General Ordinaria. Resultaran electos(as) quienes obtengan el cincuenta por ciento (50%) más uno de votos. La Junta Directiva tomará posesión, a más tardar, quince días después de la fecha de su elección. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. DURACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: Las y los miembros de la junta directiva fungirán en los cargos para los que fueren electos por un período de tres años, siendo válida su reelección. ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA: Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Cumplir y hacer que se cumplan los presentes estatutos, las decisiones de Asamblea General y las decisiones propias de la Junta Directiva; b) Ejercer la representación legal de "LA FUNDACION" por medio de su Presidente (a), quien podrá delegar esta representación en cualquier otro miembro de la Junta Directiva para asuntos determinados; c) Acordar la concesión de beneficios, donaciones, servicios o prestaciones que constituyen los objetivos y fines de esta Fundación, a favor de las personas o grupos beneficiarios que reúnan los requisitos que se establecen en este Instrumento; d) Conocer y aprobar los planes de trabajo, labores y obras a realizar; e) Proponer las políticas y los

**"FUNDACIÓN MYRNA MACK"**  
**ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO**  
**PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL**

reglamentos que sean necesarios para la buena marcha de los asuntos de "LA FUNDACION"; f) Disponer la política de contrataciones, funciones y régimen del personal de "LA FUNDACION"; g) Acordar el otorgamiento de mandatos especiales y designar a quienes deban ejercerlos; h) Administrar el patrimonio de la Fundación; i) Autorizar las gastos de funcionamiento; j) Conocer el plan de trabajo, el presupuesto anual, los informes sobre las actividades realizadas y los estados financieros y contables de la entidad presentados por el Director Ejecutivo, previamente a someterlos a consideración de la Asamblea General, y una vez aprobada por esta deberá remitir copia certificada a la Procuraduría General de la Nación; k) Formalizar cuando así lo haya aprobado la Asamblea General en Representación de la Fundación las adjudicaciones, transferencias, herencias, legados y donaciones; l) Autorizar gastos presupuestarios imprevistos de los cuales se dará cuenta a la Asamblea General en su sesión más próxima; m) Designar las comisiones y asesorías que estime convenientes; n) Conocer las denuncias en contra de las y los miembros, sobre presunta comisión de faltas, para la imposición de las sanciones que correspondan; ñ) Nombrar y remover de su cargo a quien ejerza la Dirección Ejecutiva; o) Proponer a la Asamblea General el ingreso de nuevos miembros benefactores y ordinarios en los términos que se indican en el artículo sexto inciso b; y c; p) Proponer a la Asamblea General las distinciones honoríficas a personas individuales o jurídicas que así lo ameriten por sus servicios de asistencia y bienestar social; q) Disponer la organización de sucursales, agencias, delegaciones o representaciones de "LA FUNDACION"; previa aprobación de la Asamblea General; r) Las demás que le corresponda por su calidad de órgano administrativo, o por disposición de la Asamblea General. ARTICULO TRIGESIMO TERCERO: FACULTADES ESPECÍFICAS DE CADA MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA. I. DEL PRESIDENTE: Son atribuciones específicas del Presidente(a) de la Junta Directiva: a) Ejercer la representación legal de "LA FUNDACION", en todos los actos y contratos en que "LA FUNDACION" participe. El Presidente



**José Alberto Barrera Santos**  
**Abogado y Notario**



(a) podrá delegar la representación legal en otros miembros directivos para asuntos determinados, siempre que hubiese sido facultado para ello en la Asamblea General; b) Convocar y presidir las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva; c) Vender, donar, comprar o disponer de cualquier otro modo de los bienes de "LA FUNDACION", previa autorización de la Asamblea General; d) Otorgar y revocar poderes con representación especial dando cuenta de ello a la Junta Directiva; e) Autorizar las órdenes de pago u otros documentos de crédito o designar por escrito a otro de los miembros para que lo haga en su defecto; f) Ejercer doble voto en caso de empate, en las sesiones de la Asamblea General y de Junta Directiva; g) Aquellas que le corresponda por la naturaleza del cargo o por disposición de la Asamblea;...".

TERCERO: Asimismo, tengo a la vista el acta que contiene la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de Socios Fundadores, Benefactores y Ordinarios de la "FUNDACIÓN MYRNA MACK", celebrada el diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en la sede la Fundación, en la cual obra el PUNTO SÉPTIMO cuyas partes conducentes establecen: "PUNTO SÉPTIMO: Elección de Junta Directiva dos mil dieciocho - dos mil veintiuno (2018-2021). Elección de Junta Directiva dos mil dieciocho - dos mil veintiuno (2018-2021). La Señora Presidenta de la Junta Directiva: Licenciada Helen Beatriz Mack Chang, informa a los miembros de la Asamblea General Ordinaria de Socios Fundadores, Benefactores y Ordinarios de la "FUNDACIÓN MYRNA MACK", que el período para el cual fue electa la actual Junta Directiva vencerá el veinticinco de noviembre del dos mil dieciocho, por lo que de acuerdo a lo que dictan los artículos VIGÉSIMO TERCERO, VIGESIMO SEXTO, VIGÉSIMO SÉPTIMO Y VIGÉSIMO OCTAVO de los Estatutos de la Fundación, debe procederse a la elección de la nueva Junta Directiva. Por lo expuesto se procede llevar a cabo el proceso de elección. Se presentan como candidatas a los diferentes cargos, los mismos miembros que actualmente los ocupan; no existiendo otros candidatas(as), se procede a la votación, quedando integrada la Junta Directiva, por

"FUNDACIÓN MYRNA MACK"  
ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO  
PRESIDENTE DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTE LEGAL

unanimidad de los votos de los socios Fundadores, Benefactores y Ordinarios presentes y representados, de la siguiente manera: Presidenta: Helen Beatriz Mack Chang; Vicepresidente: Erick Benjamín Aldana Mendoza; Secretario: Raúl Alcides Castillo Rodas; Tesorero: Carlos Vicente Arrazola González; Vocal I: Juan Hernández Pico y Vocal II: Clara María Josefina Arenas Bianchi. La Asamblea General Ordinaria en razón de los resultados obtenidos, por unanimidad Acuerda: 7.1 Declarar electos(as) como miembros de la Junta Directiva de la "FUNDACIÓN MYRNA MACK" a las personas ya indicadas. 7.2 El período para el cual serán electos se encuentra comprendido a partir del veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho. 7.3 La nueva Junta Directiva tomará posesión el veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho, y tendrá todas las facultades establecidas en los estatutos de la Fundación. 7.3 De acuerdo a lo que dicta el Artículo trigésimo segundo, literal b) la Señora Presidenta electa Helen Beatriz Mack Chang ejercerá la Representación Legal de la "Fundación". CUARTO: No habiendo más que hacer constar, y para que le sirva como nombramiento a Helen Beatriz Mack Chang como Presidente de la Junta Directiva y Representante Legal de "FUNDACIÓN MYRNA MACK", se finaliza la presente Acta Notarial en el mismo lugar de su inicio, a las diez horas en punto, la cual queda contenida en tres hojas de papel bond tamaño oficio, útiles las primeras dos de ellas en ambos lados y la tercera únicamente en su anverso y, a la que se le adhiere un timbre fiscal de cien quetzales número de registro doscientos noventa y un mil novecientos sesenta y seis (291966) para cubrir el impuesto correspondiente. La presente acta es leída por la requirente quien bien impuesto de su contenido, validez, objeto, efectos legales, y obligación registral, la acepta, ratifica, firmando, únicamente el infrascrito notario, quien de todo el contenido de la presente acta notarial DA FE.



**José Alberto Barrera Santos**  
Abogado y Notario



COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA SELECCIÓN DE MAGISTRADOS  
A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

2019-2024

FICHA DE PRESENTACIÓN DE IMPEDIMENTOS  
DE PERSONAS INDIVIDUALES O JURÍDICAS

Fecha: 04/02/2020 Número de Expediente: 22  
Nombres y Apellidos del Postulante: Vitalina Orellana y Orellana  
Denunciante: José Orlando Velosquez F DPI: 1781139210101  
Institución: \_\_\_\_\_  
Representante Legal: \_\_\_\_\_  
Dirección Física: 5 avenida, 10-68, oficina 511  
Quinto nivel, Zona T  
Dirección Electrónica: movimientos1cg@gmail.com  
Teléfono (s): 27305282

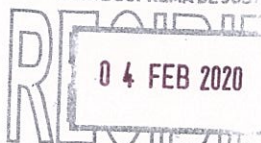
  
FIRMA

NOTA IMPORTANTE:

Adjuntar copia legible del DPI con fotografía clara.

Fotocopia legalizada de nombramiento de Representante Legal.

COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



RECIBE: Lidia HORA: 15:47

U

.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

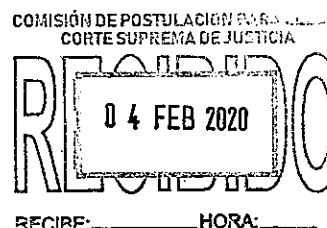
49

IDGTM17811392190101C0101<<<195  
7801033M2905165GTM<<9609560543  
VELASQUEZ<<JOSE<<<<<<<<<<<<



end





**EXPEDIENTE No. 22 (VITALINA ORELLANA Y ORELLANA)**

**SEÑORAS Y SEÑORES, MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL PERÍODO DOS MIL DIECINUEVE GUIÓN DOS MIL VEINTICUATRO.**

JOSE ORLANDO VELÁSQUEZ FUENTES, de cuarenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, dirigente sindical, de este domicilio y vecindad, identificado con el Documento Personal de Identificación, Código Único de Identificación un mil setecientos ochenta y uno espacio trece mil novecientos veintiuno espacio cero ciento uno (1781 13921 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; y **MARCO VINICIO MENDEZ LÓPEZ**, de cuarenta y ocho años de edad, soltero, guatemalteco, dirigente sindical, de este domicilio y vecino del Municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, identificado con el Documento Personal de Identificación, Código único de Identificación un mil setecientos setenta y uno espacio cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho espacio cero ciento ocho (1771 48268 0108) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; quienes señalamos como lugar de residencia y para recibir notificaciones para los efectos de esta comunicación la sede de nuestra Central Sindical, **MOVIMIENTO SINDICAL, INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG-** ubicada en la quinta (5ª) avenida, diez guion sesenta y ocho (10-68), Oficina quinientos once (511) Quinto Nivel del Edificio Helvetia, zona uno (1) del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, así también el número de teléfono 22305282 y el correo electrónico [movimientosicg@gmail.com](mailto:movimientosicg@gmail.com), y por este medio comparecemos ante ustedes con el objeto de poner en conocimiento de esa **COMISIÓN IMPEDIMENTO POR FALTA DE HONORABILIDAD PARA SER INCLUIDA EN LA NÓMINA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA PERSONA DE VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** y para el efecto:

**I. EXPONEMOS**

1. El Artículo 113 de la Constitución Política establece que los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
2. El Artículo 207 de la Constitución establece que los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores.
3. El Artículo 13 del Decreto del Congreso de la República 19-2009 Ley de Comisiones de Postulación preceptúa que en congruencia con la Constitución Política de la República, leyes constitucionales, leyes ordinarias aplicables y lo dispuesto en el mismo Decreto, las Comisiones verificarán el cumplimiento de los requisitos establecidos que deberán satisfacer los participantes. La falta de cumplimiento de requisitos será causal suficiente para excluir a cualquier participante de la nómina respectiva.
4. La Corte de Constitucionalidad al referirse al requisito **reconocida honorabilidad** ha considerado que "...B) Conforme lo indicado en el párrafo anterior, tenemos que la "honorabilidad" es un concepto eminentemente filosófico que proviene del vocablo "honor", predominantemente arraigada en la denominada doctrina moral, la que trata de definirla como la cualidad que tienen los actos de los seres humanos, con relación al bien o lo bueno. En este sentido, podemos tener una perspectiva de que la finalidad de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, al establecer dicho aspecto en la Constitución Política de la República de Guatemala, como un requisito indispensable que debían llenar los ciudadanos que aspiraran ocupar los cargos públicos de alta jerarquía de ciertos órganos establecidos en la misma Constitución, **es con el objeto de que los**

aspirantes a tal dignidad fueran personas que, de acuerdo a su comportamiento personal y profesional, tuvieran una conducta (manifestada en la voluntad de sus actos) que buscaran y procuraran la correcta interpretación de las normas o leyes sociales y jurídicas y, con ello, evidenciaran su inclinación a la debida aplicación a lo justo o la justicia (o lo que es bueno), lo que podría darles un determinado estado de honor u honorable; y por el contrario, excluir a aquellas personas que atraídos por una falsa apariencia de justicia (o de lo bueno), su actuación tratara de tergiversar o alterar las cosas para obtener un resultado contrario o prohibido por las leyes o las normas sociales y jurídicas. En el campo del derecho, el honor (de donde proviene la honorabilidad) tiene su relevancia por cuanto es tomado por ciertas ramas de las ciencias jurídicas, como por ejemplo en la civil y penal, en donde el honor o la honorabilidad son tutelados en un alto grado que, su vulneración o violación, puede ser impedimento para ejercer determinados actos o bien ser sancionado con una pena. C) Ahora bien, cuando se habla de que la honorabilidad debe ser “reconocida”, se está haciendo alusión a que las cualidades (a que se hacen referencia) de una persona, son de conocimiento de toda la sociedad o bien, de un segmento de la misma, que la muestra a aquella por lo que es en cuanto a sus méritos, talentos, destrezas, habilidades, criterio y cualidades humanas, que buscarán y procuraran la correcta aplicación de las normas o las leyes y, con ello, la justicia, y que esa actuación de la persona en el ejercicio del cargo público que pudiera ocupar, cumpla con garantizar a los habitantes de la nación, la protección a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (...). IV. Conforme lo relacionado, la “reconocida honorabilidad” es un aspecto abstracto que sólo se puede comprender de una manera intelectual y que, ni en la práctica ni en las normas constitucionales indicadas, está definida la forma de comprobarla, ni mucho menos asignarle un valor. Al respecto, este Tribunal, en cuanto a la comprobación de la “reconocida honorabilidad”, dentro del expediente tres mil quinientos treinta y seis - dos mil nueve (3536-2009) referido, indicó lo siguiente: “...En el Expediente 3690-2009 (auto de cuatro de octubre de dos mil nueve) esta Corte precisó una serie de aspectos que nutrirán este fallo, lo que permite no sólo la reiteración de algunos criterios ya sostenidos con anterioridad (Cf. Expedientes acumulados 1903-2003, 2183-2003 y 2261-2003; Expedientes 273-91, 205-94 y 300-99) sino también la elaboración de un corpus doctrinal que oriente el actuar del poder público, cuando se le exija -para la elección, nominación, selección u otro procedimiento similar- valorar sobre el aspecto „reconocida honorabilidad“... sobre la cual esta Corte se ha pronunciado con anterioridad... en cuanto a considerarse éste un requerimiento comprobable mediante una serie de elementos.>> Para efectos de este fallo, la comprobación de la honorabilidad aludida en el auto citado, se lista en literales, así: A) **Acreditaciones: la presentación de documentos o certificaciones**“. B) Criterios sociales: „la buena conducta profesional, la estima gremial, el Expediente 942-2010 9 reconocimiento del foro público, el decoro profesional, entre otros, siempre con el debido respeto al principio de presunción de inocencia“. C) Repercusiones en el actuar: „tanto en lo profesional (si es que el candidato proviene del sector del ejercicio liberal), como en la judicatura u otro servicio prestado desde la administración pública o en cualquier otro ramo, entendiéndose como tal no solo su ejercicio profesional, sino también las actividades personales, comerciales o de cualquier otra índole que resultaren incompatibles con el ejercicio de la función pública; en el caso de mérito con la judicatura“. D) Respeto a la intimidad: „De no ser así, se correría el peligro de entrar a aspectos de la intimidad personal o a la esfera del derecho a la propia imagen (derivado del contenido de los artículos 4 y 5 constitucionales), fuera de todo aquello que nutre la reconocida honorabilidad y lleve a juicios de valor ajenos, que se alejen de la previsión constitucional en lo que a este aspecto atañe“. E) Criterios de organismos internacionales: <>. F) Legislación ordinaria: <>. G) Criterios complementarios: la exégesis anterior, sienta criterios para lo que en diversos ámbitos se denomina „Guía de buenas prácticas“ a favor de la transparencia y con ello, ante futuros procesos de elección de diversos funcionarios públicos (no sólo por parte del Congreso de la República, sino también por Poderes del Estado o entidades gubernamentales), se cuente con criterios que orienten su actuar en el futuro, tal y como estimó esta Corte en el Expediente 2409- 2009, Sentencia de veinticinco



de noviembre de dos mil nueve, al considerar: „debido a las especiales circunstancias que lo generaron y eventualmente podrían nuevamente acaecer, esta sentencia debe clarificar el cómo del actuar público“. También deberá tomarse en cuenta lo resuelto en la Opinión Consultiva 3755-2009, de siete de octubre de dos mil nueve, en cuanto a las preguntas formuladas por el Congreso de la República a esta Expediente 942-2010 10 Corte, sobre la substitución de aquellos candidatos ya electos, con base en „pruebas fehacientes“ y „qué denuncias son fundamentadas (...) sin que ello signifique violar el principio de inocencia, el derecho de defensa y el precepto constitucional que establece que la potestad de juzgar corresponde a los tribunales de justicia, que ninguna otra autoridad puede intervenir en la administración de justicia y que ello no atenta contra la independencia del Organismo Judicial“... En los casos de elecciones que en la Constitución Política de la República o en las leyes complementarias de jerarquía constitucional no se encuentren expresamente reguladas, la legislación ordinaria puede establecer precedentes que la legislación autorice, siempre dentro del marco de valores que el sistema constitucional proclame como sustanciales... en particular, porque los requisitos profesionales y éticos que la Constitución establece para optar a tal dignidad constituyen características individuales... siendo ideal que la designación se haga bajo la estricta responsabilidad moral de los electores, habida cuenta que condiciones esenciales de la vida humana, como la libertad, la igualdad, la propiedad e incluso la vida misma, pueden estar sometidos a la prudencia, envidia, carácter y probidad de la administración de justicia. Es atendiendo a esta razón que, precisamente, estos requisitos profesionales y éticos con los que debe cumplir cada aspirante, deben ser calificados con especial rigorismo, en atención a que una persona es honorable o no lo es y por ende lógicamente no existen categorías en cuanto a honorabilidad se refiere: -menos honorable, más honorable, o medio honorable...” [Sentencia de fecha 24 de agosto de 2010 dictada dentro del Expediente 942-2010]. Las negrillas son propias.

## II. DEL IMPEDIMENTO POR FALTA DE HONORABILIDAD PARA SER INCLUIDA EN LA NÓMINA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA A LA PERSONA DE VITALINA ORELLANA Y ORELLANA

1. El motivo de impedimento para que la persona de VITALINA ORELLANA Y ORELLANA pueda ser incluida en la nómina de candidatos para ocupar el cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia radica en el retardo injustificado en la tramitación del Expediente de Amparo número 765-2019 de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, cámara de la cual hace parte la aspirante VITALINA ORELLANA Y ORELLANA.
2. De conformidad con el artículo 12 de la Constitución Política de la República; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos toda persona tiene el derecho a la defensa de sus derechos, a un debido proceso legal y al acceso a una administración de justicia pronta y cumplida que, de conformidad con el artículo 203 de la Constitución Política de la República debe administrarse con sujeción a la Constitución Política de la República de Guatemala y demás leyes del país.
3. Estas previsiones se encuentran reforzadas por el artículo 468 del Código Penal que al tipificar el delito de Retardo de Justicia describe el tipo penal en los siguientes términos: “Comete delito de retardo de justicia, el juez que no diere curso a una solicitud presentada legalmente o que, a sabiendas, retardare u ordenare retardar la administración de justicia; será sancionado con prisión de dos a cuatro años, multa de cien mil a quinientos mil Quetzales, e inhabilitación especial...”.
4. En materia de amparo, el debido proceso legal para la tramitación de dicha garantía se encuentra regulado en la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad y en el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, Disposiciones Reglamentarias y

Complementarias a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad estableciendo las etapas y plazos en que debe tramitarse el amparo.

5. El artículo 5 literal d) determina que los amparos, deben ser tramitados por los tribunales con prioridad sobre cualquier otro asunto que deba conocer el tribunal.
6. De la misma manera, la prioridad entre amparos debe observarse sobre base del principio de igualdad ante la ley resguardado por los artículos 5 de la Constitución Política de la República; 14, 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 24 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, lo cual determina que el orden de tramitación de cada amparo depende del orden de su ingreso en el tribunal que deba conocerlo y, habida cuenta de esto, la demora en la tramitación de un amparo no solo vulnera la ley de la materia y constituye una conducta típica, antijurídica y culpables sino que además vulnera los derechos humanos.
7. En este caso, la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia en el Expediente de Amparo identificado en ese tribunal con el número 765-2019, recibió el planteamiento del amparo con fecha 26 de junio de 2018, no obstante lo previsto en los artículos 5 literal d) y 33 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad retardó la tramitación del mismo no se pronunció sobre la protección interina sino hasta el 30 de mayo de 2019.
8. Por este motivo, la Corte de Constitucionalidad, dentro del Expediente identificado como 6757-2019 en auto de fecha 20 de enero de 2020, declaró con lugar parcialmente el Ocurso en Queja promovido por los terceros interesados en el amparo.
9. La Corte de Constitucionalidad consideró: "...Ahora bien, respecto al argumento relativo a retardo en la tramitación del amparo, esta Corte determina, del estudio de los antecedentes, que el Tribunal de Amparo de primer grado recibió el expediente de mérito el veintiséis de julio (sic) de dos mil dieciocho y fue sino hasta el treinta de mayo de dos mil diecinueve que se pronunció sobre la protección interina; posteriormente, el ocho de octubre de dos mil diecinueve, relevó de prueba. Lo anterior evidencia que el *a quo* no ha observado el principio de celeridad que rige el amparo, motivo por el que se exhorta a la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, a que atienda lo dispuesto en el artículo 5º literal d) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, con relación a que debe tramitar los amparos con prioridad a los demás asuntos..."
10. En ese sentido, ha quedado evidenciado que los integrantes de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, entre ellos la persona de la aspirante **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** retardaron injustificadamente la tramitación del expediente de amparo identificado con el número 765-2019, extremo que fue corroborado y resuelto por la Corte de Constitucionalidad en auto de fecha 20 de enero de 2020 dictado dentro del Expediente 6757-2019 de la Corte de Constitucionalidad.
11. La falta de honorabilidad de la persona de la aspirante **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA**, originada por el retardo en la administración de justicia materializado en el Expediente de amparo 765-2019 de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, órgano del cual hacía parte la profesional individualizada, se encuentra documentada y evidenciada en el siguiente documento: a) Auto de fecha 20 de enero de 2020 dictado dentro del Expediente 6757-2019 de la Corte de Constitucionalidad, en la cual el máximo tribunal constitucional conoce, corrobora y declara la existencia de un retardo en la tramitación del amparo 765-2019 por parte del tribunal del cual hace parte la aspirante **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** y en consecuencia dicha persona no puede ser incluida en la Nómina para ocupar el cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia para el período 2019-2024.

### III. ACREDITACIÓN DE LA FALTA DE HONORABILIDAD DE LA PERSONA DE VITALINA ORELLANA Y ORELLANA

1. Copia simple del Auto de fecha 20 de enero de 2020 dictado dentro del Expediente 6757-2019 de la Corte de Constitucionalidad, en la cual el máximo tribunal constitucional

conoce, corrobora y declara la existencia de un retardo en la tramitación del aparo 765-2019 por parte del tribunal del cual hace parte la aspirante **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA**.

#### IV. SOLICITAMOS


1. Que se tenga por presentado este memorial y documento adjunto y se inicie el expediente respectivo.
2. Se tome nota del lugar que señalamos para recibir notificaciones.
3. Se tenga por puesto en conocimiento de esa Comisión **IMPEDIMENTO POR FALTA DE HONORABILIDAD PARA SER INCLUIDA EN LA NÓMINA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL PERÍODO 2019-2024 A LA PERSONA DE VITALINA ORELLANA Y ORELLANA**.
4. Se procedan a conocer los hechos puestos en conocimiento de esa Comisión relativos al impedimento por falta de honorabilidad para ser incluida en la Nómina de candidatos para ocupar el cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia para el período 2019-2024 de la persona de **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** los cuales se encuentran plena y fehacientemente documentados.
5. Se excluya a la persona de **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** de la Nómina de candidatos para ocupar el cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia para el período 2019-2024 por carecer de honorabilidad.

Guatemala, 3 de febrero de 2020.

ORIGINAL Y UNA COPIA DEL PRESENTE MEMORIAL, DOCUMENTO ADJUNTO, COPIA DEL DPI DE LOS COMPARECIENTES Y DVD CONTENIENDO EN ARCHIVO PDF LA PRESENTE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.



JOSE ORLANDO VELÁSQUEZ FUENTES



MARCO VINICIO MENDEZ LÓPEZ





CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD  
REPÚBLICA DE GUATEMALA

EXPEDIENTE 6757-2019 Of. 14  
Ref: 765-2019



4097.2020

En la ciudad de Guatemala, el diecisiete de enero del año  
DOS MIL VEINTE, a las diecisiete horas con quinca  
minutos, en la **Quinta avenida diez - sesenta y ocho zona**  
**uno, Edificio Helvetia, quinto nivel, oficina quinientos**  
**once**, notifico Auto de fecha **VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE**

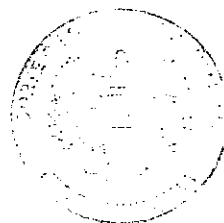
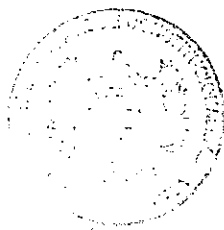
A: **René Bol Cú**, quien se unificó personería para efectos de  
notificación

por medio de cédula de notificación que contiene las copias de ley y que entrego  
a: Lesbia Amargueta

Quién de enterado: 58 firmó.

DOY FE: 60

Consta de 6 folios.



No se llevó a cabo la notificación por la causa siguiente

☐ Dirección Inexacta

☐ No existe la dirección

☐ Persona a notificar falleció

☐ Lugar desocupado

☐ Persona fuera del país

☐ Datos no concuerdan

RAZÓN:



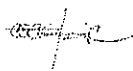
**EXPEDIENTE 6757-2019**

**CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD:** Guatemala, veinte de enero de dos mil veinte.

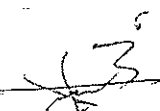
Se tiene a la vista, para resolver, el ocurso en queja que promovió Amalia Eugenia Ac Chen, Enma Yohana Jul Coy de Caal, Edwin Leonardo Bol Caal, Flabiano Caal Ac, Mildred del Rosario Sucup Véliz de Hernández, René Bol Cú, Ronald Hans Caal Yat, Claudia Maribel Moreno Pastrán y Sandra Ninet del Cid del Cid, terceros interesados, contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.

**ANTECEDENTES**

**I. ACTUACIONES QUE MOTIVAN EL OCURSO:** de lo expuesto por la ocursante y de las constancias procesales, se resume: **a)** ante la autoridad ocursada se tramita amparo presentado por el Estado de Guatemala contra la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, en el que se señaló como acto reclamado la resolución de seis de abril de dos mil dieciocho, emitida dentro del expediente 01213-2016-00530, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de apelación que presentó y, como consecuencia, se confirmó la decisión de primer grado originada por demanda presentada por diversas personas en su contra, a fin de que se declarara su traslado del renglón presupuestario cero veintidós (022), al cero once (011); **b)** admitida a trámite la acción y luego de haberse concedido audiencia a las partes, dentro de las cuales figuran como terceros interesados los ocursantes, estos presentaron alegato en el que requirieron que se suspendiera en definitiva el amparo, por incumplimiento del presupuesto de temporalidad. Lo anterior, pues el acto reclamado fue notificado el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, no obstante, la acción fue recibida por el Tribunal de



  
GPPE-CPIP

  
CPIP-NAH

  
CPIP-JFDV

  
DOCTA

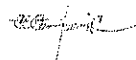
  
SECGRAL-CPIP



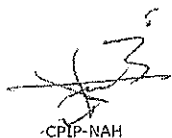
Amparo el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, y si bien, el escrito de amparo se presentó ante el Juez de Paz de Faltas de Cobán, Alta Verapaz, esto no interrumpió el plazo, puesto que los juzgados de paz pueden ejercer su jurisdicción exclusivamente dentro de la competencia territorial que les fue asignada, que en este caso era distinta a la ejercida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio; **c)** el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve **–acto ocurrido–**, la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, tuvo por evacuada la audiencia conferida y, respecto a la suspensión requerida, decidió no acceder a lo solicitado, en virtud que: "...este Tribunal analizó los presupuestos procesales que le dan viabilidad a la presente acción de amparo". **A) ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA CUESTIONAR LA**

**ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD OCURSADA:** los ocurridos manifiestan que:

**i)** para interrumpir el plazo en el presente amparo el postulante debió haber presentado su escrito inicial ante el juez de turno con competencia territorial en la ciudad de Guatemala, sin embargo, fue presentado ante el Juez de Paz de Turno de Cobán, órgano jurisdiccional sin competencia territorial, lo que provoca que no se interrumpa el plazo para presentar amparo. Añadieron que la resolución reclamada fue notificada el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, no obstante el escrito de amparo fue recibido en la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, hasta el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, es decir, seis días después del veinte de junio de dos mil dieciocho, cuando finalizó el plazo de treinta días que establece la ley de la materia; **ii)** la amparista tiene su sede en la ciudad de Guatemala, lugar donde ha recibido notificaciones dentro del expediente que sirve de antecedente en la presente acción constitucional, por lo que no tenía ningún impedimento para accionar ante la Cámara respectiva y no



  
GPPE-CPIP

  
CPIP-NAH

  
CPIP-JFDV



  
SECGRAL-CPIP





de la forma que lo hizo; **iii)** conforme a los artículo 62 y 104 de la Ley del Organismo Judicial, el Juez de Paz de Cobán, Alta Verapaz, carecía de competencia territorial para recibir el escrito de amparo, y **iv)** se ha demorado en demasía el trámite del amparo. **B) PRETENSIÓN:** que se declare con lugar el presente correctivo y, como consecuencia, se deje sin efecto el acto ocursado y se ordene al *a quo* analizar el presupuesto de temporalidad y suspender el trámite de la acción constitucional.

**II. AUDIENCIA A LA AUTORIDAD OCURSADA:** la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, remitió copia digital del expediente de amparo 765-2019.

#### CONSIDERANDO

-I-

El artículo 72 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad establece que, si alguna de las partes afectadas estima que en el trámite y ejecución del amparo el Tribunal no cumple con lo previsto en la ley o lo resuelto en la sentencia, podrá ocurrir en queja ante la Corte de Constitucionalidad para que, previa audiencia por veinticuatro horas al ocursado, resuelva lo procedente.

-II-

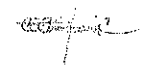

En el caso *sub examine*, los presentados formulan ocursó en queja contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, reprochando la decisión por la que no accedió a suspender en definitiva la presente acción constitucional. Argumentan los ocursantes que el amparo fue promovido de forma extemporánea, al haber sido recibido el escrito inicial por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, fuera del plazo legal establecido.

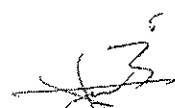


Para resolver el presente asunto, debe señalarse que el artículo 20 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad regula que la petición de amparo debe hacerse dentro del plazo de los treinta días siguientes al de la última notificación de la resolución al afectado o de conocido por este el hecho que, a su juicio, le perjudica. Por consiguiente, debe entenderse que cuando la petición de amparo no se hace dentro del plazo previsto en la ley, caduca el derecho a demandar la protección de esa garantía constitucional. Esto no puede ser de otra manera por cuanto que el requisito del plazo es de orden público y atiende a razones de certeza jurídica, de modo que cuando no se cumple con pedir el amparo dentro del citado plazo el tribunal constitucional queda impedido para examinar el fondo del reclamo.

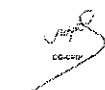
Dicho plazo es, de conformidad con la doctrina, de los denominados, fatales, ello porque una vez transcurrido este sin que se haya ejercido la acción de amparo, se produce ineludiblemente la prescripción de la acción a promoverlo, sin que exista medio o forma que viabilice el mismo cuando tal plazo ha vencido.

Por otro lado, es oportuno traer a cuenta el contenido del artículo 6o del Auto Acordado 1-2013 de esta Corte el cual dispone que la competencia de los Tribunales de Amparo debe ser ejercida bajo su estricta responsabilidad, por razón de **territorio, materia y jerarquía de la autoridad denunciada**. Agrega que: "...Cuando la petición de amparo sea presentada ante un órgano jurisdiccional no competente conforme esos elementos, éste se limitará a dictar de inmediato resolución que contenga como único pronunciamiento la remisión al Tribunal competente...". De esa disposición se extrae que la competencia, en materia de amparo, será ejercida por las autoridades judiciales atendiendo a los elementos antes descritos [territorio, materia y jerarquía].

  
  
GPPE-CPIP

  
CPIP-NAH

  
CPIP-JFDV



  
SECGRAL-CPIP



Si alguno de estos elementos no se configura en el caso particularizado, entonces la autoridad judicial respectiva será incompetente para conocer de la controversia, por lo que debe ajustar su proceder a lo establecido en la norma previamente citada, es decir, debe dictar resolución que contenga como único pronunciamiento la remisión al Tribunal competente o, en su caso, a uno de los centros de distribución implementados por el Organismo Judicial, para la asignación correspondiente, salvo que de lo expuesto en el escrito originario se advierta riesgo a la vida de las personas, en cuyo caso el órgano jurisdiccional ante el que se presente debe emitir pronunciamiento en relación con el amparo provisional.

-III-

De las constancias procesales, se advierte que el Estado de Guatemala presentó el amparo el **veinte de junio de dos mil dieciocho**, a las diecisiete horas con veinticinco minutos [sello de recepción obrante en hoja once (11) del documento digital], ante el Juez de Paz Penal de Faltas de Cobán, Alta Verapaz, autoridad judicial que emitió resolución de esa misma fecha por la cual ordenó remitir el escrito de amparo a la autoridad ocursoada; documentos que fueron recibidos el **veintiséis de junio de dos mil dieciocho** en la recepción de la Corte Suprema de Justicia, Sección de Amparo [sello de recepción obrante en hoja diecisiete (17) del documento digital].

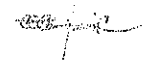


Como primera cuestión, se hace necesario indicar que la competencia territorial del amparo depende, conforme la normativa señalada, del domicilio de la autoridad denunciada; en el presente caso, la acción fue presentada en el territorio en el cual se encuentra la sede de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán, departamento de Alta Verapaz, órgano que figura como



reprochado en la acción. Adicionalmente, el artículo 5 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucional establece, dentro de los principios procesales que rigen el amparo, que todos los días y horas son hábiles; del análisis de las actuaciones, este Tribunal también advierte que la acción fue presentada por el accionante en horario inhábil.

Aunado a lo anterior, el artículo 3 del citado Auto, preceptúa: *“Competencias de la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia. Se asigna competencia para conocer en materia de amparo a la Cámara de amparo y antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, en las acciones que se interpongan contra: a) Las Salas de la Corte de Apelaciones y cortes Marciales...”*. Según la intelección de esa norma, en congruencia con las disposiciones previamente referidas, que aluden a la necesaria remisión de las actuaciones al tribunal competente, el juez de paz multicitado remitió, acertadamente, el escrito contentivo del amparo al órgano competente [al cual iba dirigida la acción], es decir, a la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio.

Las anteriores consideraciones evidencian que resultaría excesivamente rigorista y, por ende, contrario a los principios que inspiran el trámite del amparo, iniciar el cómputo del planteamiento de la acción a partir de la fecha y hora en que fue recibida la acción por el tribunal de amparo competente, como pretenden los ocurantes, tomando en consideración que la acción fue presentada en el municipio en el que tenía su sede la autoridad denunciada y en un horario inhábil; por aparte, las mismas reglas de competencia de la materia disponen que el incumplimiento en su observancia conlleva que la acción sea remitida al tribunal a quien corresponde conocer y resolver el asunto, como aconteció en el presente

  
GPPE-CPIP  
CPIP-NAH  
CPIP-JFDV  
SECGRAL-CPIP

caso, sin que se prevean legalmente otras consecuencias como la de un eventual rechazo de la acción, o bien, la no interrupción del plazo en que debe presentarse la acción.

Por lo tanto, este Tribunal estima adecuada la interpretación realizada por el *a quo*, con relación al cumplimiento del presupuesto de temporalidad en la presente acción, al haber realizado el cómputo del plazo de treinta días tomando en consideración la fecha en que se notificó el acto reclamado [veintiuno de mayo de dos mil dieciocho] y la fecha en que el escrito inicial fue presentado ante el juzgado de paz [veinte de junio de ese año]. Por esas razones, la queja, en cuanto a tales motivos, resulta improcedente.

Ahora bien, respecto al argumento relativo a retardo en la tramitación del amparo, esta Corte determina, del estudio de los antecedentes, que el Tribunal de Amparo de primer grado recibió el expediente de mérito el veintiséis de julio de dos mil dieciocho y no fue sino hasta el treinta de mayo de dos mil diecinueve que se pronunció sobre la protección interina; posteriormente, el ocho de octubre de dos mil diecinueve, relevó de prueba.

Lo anterior evidencia que el *a quo* no ha observado el principio de celeridad que rige el amparo, motivo por el que se exhorta a la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, a que atienda lo dispuesto en el artículo 5o literal d) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, con relación a que debe tramitar los amparos con prioridad a los demás asuntos.

Por lo anterior, esta Corte concluye el correctivo debe declararse parcialmente con lugar, tal como se hará en la parte resolutive del presente auto, con el solo objeto de exhortar a la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, a que observe lo dispuesto en el artículo 5º literal d) ibídem.

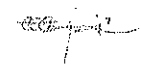


### LEYES APLICABLES

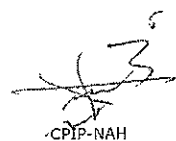
Artículos citados 265, 268, 272 inciso i), de la Constitución Política de la República de Guatemala; 1o, 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 19, 46, 149, 150, 163 inciso i), 179, 185 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 7 Bis del Acuerdo 3-89, 33 y 34 del Acuerdo 1-2013, ambos de la Corte de Constitucionalidad.

### POR TANTO

La Corte de Constitucionalidad, con fundamento en lo considerado y leyes citadas, resuelve: **I. Por ausencia temporal** del Magistrado Neftaly Aldana Herrera, se integra el Tribunal con el Magistrado José Mynor Par Usen, para conocer el presente asunto. **II. Con lugar parcialmente** el ocurso en queja que formuló Amalia Eugenia Ac Chen, Enma Yohana Jul Coy de Caal, Edwin Leonardo Bol Caal, Flabiano Caal Ac, Mildred del Rosario Sucup Véliz de Hernández, René Bol Cú, Ronald Hans Caal Yat, Claudia Maribel Moreno Pastrán y Sandra Ninet del Cid del Cid, terceros interesados, contra la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio. **III. Exhorta** al *a quo* a que observe lo dispuesto en el artículo 5o literal d) de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, con relación a que debe tramitar los amparos con prioridad a los demás asuntos. **IV. Notifíquese** y, remítase certificación de lo resuelto al tribunal ocurado.

  
GPPE-CPIP

  
GPPE-CPIP

  
CPIP-NAH

  
CPIP-JFDV


  
SECGRAL-CPIP

  
SECGRAL-CPIP

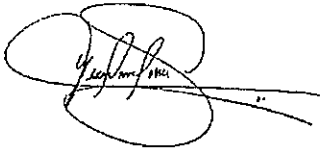


**CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD**  
REPÚBLICA DE GUATEMALA, C.A.

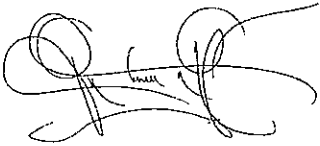
Página 9 de 9  
Expediente 6757-2019



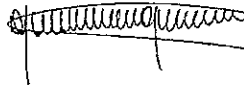
Firmado digitalmente  
por BONERGE  
AMILCAR MEJIA  
ORELLANA Fecha:  
20/01/2020 11:55:47 a.  
m. Razón: Aprobado  
Ubicación: Corte de  
Constitucionalidad



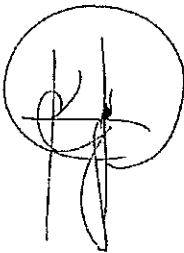
Firmado digitalmente  
por GLORIA PATRICIA  
PORRAS ESCOBAR  
Fecha: 20/01/2020  
11:58:26 a. m. Razón:  
Aprobado Ubicación:  
Corte de  
Constitucionalidad



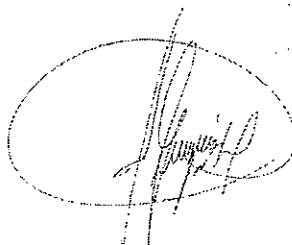
Firmado digitalmente  
por JOSE FRANCISCO  
DE MATA VELA  
Fecha: 20/01/2020  
12:01:19 p. m. Razón:  
Aprobado Ubicación:  
Corte de  
Constitucionalidad



Firmado digitalmente  
por DINA JOSEFINA  
OCHOA ESCRIBA  
Fecha: 20/01/2020  
12:04:40 p. m. Razón:  
Aprobado Ubicación:  
Corte de  
Constitucionalidad



Firmado digitalmente  
por JOSE MYNOR  
PAR USEN Fecha:  
20/01/2020 12:06:49  
p. m. Razón:  
Aprobado Ubicación:  
Corte de  
Constitucionalidad



Firmado digitalmente  
por MARTIN RAMON  
GUZMAN  
HERNANDEZ Fecha:  
20/01/2020 12:29:44 p.  
m. Razón: Aprobado  
Ubicación: Corte de  
Constitucionalidad









COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA SELECCIÓN DE MAGISTRADOS  
A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
**2019-2024**

**FICHA DE PRESENTACIÓN DE IMPEDIMENTOS  
DE PERSONAS INDIVIDUALES O JURÍDICAS**

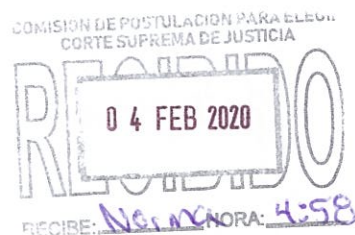
Fecha: 04/02/2020 Número de Expediente: 22  
Nombres y Apellidos del Postulante: VITALINA ORELLANA Y ORELLANA  
Denunciante: CARLOS ROLANDO YAX MEDRANO DPI: 2995529690101  
Institución: \_\_\_\_\_  
Representante Legal: \_\_\_\_\_  
Dirección Física: 13 CALLE 2-14 ZONA 1, CIUDAD DE  
GUATEMALA  
Dirección Electrónica: CONTACTO @ALIANZA REFORMAS.ORG  
Teléfono (s): 2463 2323

  
FIRMA

**NOTA IMPORTANTE:**

Adjuntar copia legible del DPI con fotografía clara.

Fotocopia legalizada de nombramiento de Representante Legal.





Guatemala, 4 de febrero de 2020

Señores/as miembros/as de la Comisión de Postulación para selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, período 2019-2024, con base en lo establecido en la Constitución Política de la República, la ley de Comisiones de Postulación decreto número 19-2009, la Ley de la Carrera Judicial decreto número 32-2016 y en atención a la publicación de fecha 31 de enero de 2020 en diarios de mayor circulación, en la cual invita a cualquier persona jurídica o individual a presentar impedimentos a los aspirantes que continúan en el proceso de selección, se hace saber a la Comisión de la existencia del siguiente:

**IMPEDIMENTO:**

<b>Datos del o la aspirante contra quien se presenta el impedimento:</b>	
<b>Nombre:</b>	VITALINA ORELLANA Y ORELLANA
<b>Número de expediente</b>	22
<b>Motivo:</b>	
<u>La aspirante VITALINA ORELLANA Y ORELLANA no es idónea por poseer conflicto de interés en el proceso, ya que es comisionada en la Comisión de Postulación de Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados y de igual categoría y candidata a magistrada de Corte Suprema de Justicia.</u>	
<b>Hechos:</b>	
La aspirante actualmente participa como comisionada, puntualmente como representante por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la comisión para elegir magistrados de la Corte de apelaciones y otros Tribunales Colegiados, y al mismo tiempo es candidata para magistrada de la Corte Suprema de Justicia.	
<u>La aspirante reúne las calidades de electora y candidata en este proceso,</u> cuestión que aunque aún no es prohibida expresamente en la ley, es indebida desde el plano ético y profesional. Ya que atenta de manera directa al Estado democrático de Derecho al tener esta doble condición, por las facultades que reúne en ambos procesos, otorgándole poderes que inciden a sus intereses personales por la influencia que el puesto otorga.	
El Diccionario del español jurídico establece que por conflicto de intereses se debe entender "Colisión entre las competencias decisorias que tiene el titular de un órgano administrativo y sus intereses privados, familiares o de otro orden, que pueden afectar a la objetividad de las decisiones que adoptan. El conflicto de intereses determina ordinariamente el deber de abstención en la toma de decisiones, o incluso la incompatibilidad para mantener la titularidad de un determinado cargo". <sup>1</sup>	
Ahora bien, Transparencia Internacional ha explicado el Conflicto de Interés de la siguiente forma: "Situación en la que un individuo o la entidad para la que trabaja, ya sea un gobierno, empresa,	

<sup>1</sup> Real Academia Española. Diccionario del español jurídico. Conflicto de intereses. Disponibilidad y acceso: <https://dej.rae.es/lema/conflicto-de-intereses>



medio de comunicación u organización de la sociedad civil, se enfrenta a elegir entre los deberes y demandas de su posición y sus propios intereses privados".<sup>2</sup>

Específicamente en el ámbito público, existe un conflicto de interés cuando "un funcionario público hace uso de su posición para beneficiar sus intereses personales, como contratar de proveedor a la empresa de un familiar directo, o interferir en la regulación de una industria con la idea de trabajar para ella una vez que acabe su mandato público".<sup>3</sup>

Asimismo, existe conflicto de interés "cuando un funcionario público obtiene un beneficio de manera ilegítima como resultado de una decisión que ha tomado en función de su cargo o competencias".<sup>4</sup> En ese sentido, el conflicto de interés se relaciona con la ética pública y, por otro lado, se vincula con el problema de corrupción.

Por su parte, Movimiento Pro Justicia explica que, según la Oficina de Ética de Naciones Unidas, el conflicto de interés es una situación en donde los intereses privados de una persona interfieren o puede entenderse que interfieren en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

Además, señala que, según lo preceptuado en el Artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación, *"...no podrán ser nominadas las personas que integren las comisiones de postulación. Por aparte, el Decreto 16-2005, Ley de garantía de imparcialidad de las comisiones de postulación, prohíbe que los funcionarios contraten o nombren en cargos a quienes los hubieren favorecido con su voto en procesos de postulación. El espíritu de ambos cuerpos legales no admite dudas: el mandato es cerrar espacios al tráfico de influencias, al conflicto de interés y a toda forma de nepotismo. El espíritu es proteger la igualdad y asegurar imparcialidad y objetividad"*<sup>5</sup>.

El conflicto de intereses entre comisiones es palpable en el actual proceso, un ejemplo sucedido fue en las sesiones dos y tres de fechas 21 y 28 de agosto de 2019, esta comisión discutió la aprobación de un cronograma de trabajo con fechas claves como la presentación de nómina al Congreso de la República, dichas sesiones fueron entorpecidas por la intervención de comisionados representantes del Colegio de Abogados y Cortes de Apelaciones, que a través de sus posturas impidieron que se determinara una fecha exacta para la presentación de la nómina.

Dicha situación fue señalada por algunos decanos miembros de la comisión quienes evidenciaron la falta de confianza ante las posturas de estos comisionados ya que de manera evidente buscaban retrasar el proceso a la espera de que la comisión de Cortes de Apelaciones determinara fecha de su entrega de nómina, esto evidencia como existe interrelación directa entre una y otra comisión, cuestión lamentable que se incrementa al existir aspirantes que puedan influir y decidir en ambas comisiones para ocupar el cargo de magistrado de Corte Suprema de Justicia consolidando y perpetuando el conflicto de interés que desde el inicio de su participación como

<sup>2</sup> Transparencia Internacional. Glosario Anticorrupción. Conflicto de interés. Disponibilidad y acceso: [https://www.transparency.org/glossary/term/conflict\\_of\\_interests](https://www.transparency.org/glossary/term/conflict_of_interests)

<sup>3</sup> División de Innovaciones para Servir al Ciudadano del BID. Los dos lados del mostrador: ¿Cómo prevenir el conflicto de interés en los funcionarios públicos? 2018. Disponibilidad y acceso: <https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/como-prevenir-el-conflicto-de-intereses-entre-los-funcionarios-publicos/>

<sup>4</sup> Coalición por la Transparencia, Acción Ciudadana, Cámara de Comercio de Guatemala, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Los conflictos de interés en el sector público. Guatemala. 2004. Pág. 9. Disponibilidad y acceso: [http://www.oas.org/juridico/spanish/gtm\\_res48.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/gtm_res48.pdf)

<sup>5</sup> Movimiento Pro Justicia. Conflicto de intereses y tráfico de influencias en el proceso de elección de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (2016-2021). Guatemala. Disponibilidad y acceso: <http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/Conflicto%20de%20inter%C3%A9s%20en%20proceso%20de%20integraci%C3%B3n%20de%20CC-2016.pdf>



comisionada y aspirante ostenta (estas sesiones constan en videos públicos de los archivos de la Comisión).

La aspirante pudo decidir al momento de integrar la comisión de Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados participar o no, pudiendo excusarse ante el pleno presentando sus pretensiones laborales, pero no lo hizo porque decidió involucrarse en el proceso como comisionada y así tener una ventaja sobre su elección. Esta situación es contraria al comportamiento esperado para un magistrado que puede ocupar los más altos cargos en la justicia del país y de ningún modo puede permitirse que estos perfiles que desde su inicio han utilizado las leyes a su antojo sigan manipulando las normas a la conveniencia de sus intereses con prácticas indebidas y clientelares.

La aspirante ha ignorado que como comisionada está actuando como funcionaria pública, ignorando de manera evidente lo que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 153 establece que: *"Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución."*

Los integrantes de las Comisiones de postulación, ejercen una función pública, ya que de esta se puede entender que es toda actividad temporal o permanente, remunerada y honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio del Estado o de sus entidades en todos sus niveles o jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal.

De lo anterior, se puede establecer que los comisionados desempeñando la función pública, existen diversas situaciones en las que los intereses públicos se enfrentan con los intereses propios del aspirante, por lo que se puede indicar que eso se vería enmarcada dentro de la definición de conflicto de interés, que para lo cual se debe hacer mención que es: cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña.

El conflicto de interés se encuentra regulado en el artículo 20 de las normas de comportamiento ético del Organismo Judicial, Acuerdo de la Corte Suprema número 22-2013 que indica: *"El personal del Organismo Judicial no debe utilizar su cargo para fomentar el éxito de negocios privados o para su beneficio personal. En tal sentido, le está expresamente prohibido: a) Incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad; b) Aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dádiva, presente, ofrecimiento o promesa, para realizar un acto relativo a su cargo o abstenerse de un acto que debiera practicar; c) Aceptar donación, empleo, cargo o comisión para sí, su cónyuge o parientes legales, que procedan de cualquier persona física o jurídica cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, sujetas a juicio, reguladas o supervisadas por el funcionario o empleado; y d) Intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, traslado, ascenso, cese o sanción de cualquier funcionario o empleado, cuando tengan interés personal, familiar o de negocios, o puedan derivar alguna ventaja o beneficio para ellos, su cónyuge o parientes legales."*

De esa cuenta, las personas que llenan ambas calidades, de comisionados y aspirantes, no pueden competir con el resto de profesionales que se presentaron en el proceso, debido a la generación de posibles prácticas que recaerían de forma indebida. Asimismo con el conflicto de





intereses que se puede suscitar, tal y como lo establece el artículo anterior, está expresamente prohibido intervenir o participar indebidamente en la selección o nombramiento de cualquier funcionario o empleado cuando se tenga un interés personal, familiar o de negocios, la cual recae en esta situación en particular, en virtud que en este proceso en específico la señora VITALINA ORELLANA Y ORELLANA, es comisionada a elegir magistrados de las salas de las cortes de apelaciones y además de eso es candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia, donde abre las puertas a que se dé la práctica de negociar o de ofrecer un trato de un comisionado hacia otro comisionado para que integren la nómina de donde aspira la persona.

En el año 2014, en el proceso de comisiones de postulación para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de Salas de la Corte de apelaciones, fue denunciada esta mala práctica, ya que fue objetado por la forma en la que se integraron las nóminas de candidatos a magistrados para esas altas cortes, debido a que la elección se hizo entre ellos en un mecanismo conocido en ese entonces como "tú me eliges, yo te elijo"

"El yo te elijo, tú me eliges" es la forma en que los comisionados que forman parte de una Comisión se postulan como candidatos en la otra y si no resulta electo no apoya la elección de otros en la postuladora que integra. En el proceso del 2014 hubo 15 de estos casos.

La condición de integrante de la Comisión para elegir magistrados de las Cortes de apelaciones, que ostenta el aspirante en mención, le permite una condición de poder que queda enmarcada en el conflicto de intereses, por lo que la aspirante no debería de continuar participando en el proceso.

En cuanto a otras violaciones, se puede agregar que también se vería afectada la independencia judicial contenida en el artículo 203 la cual se encuentra contenida en la Constitución Política de la República de Guatemala, que se refiere a que los jueces y magistrados son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente estarán sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. Debe de ser una judicatura integral, imparcial, que garantiza la vigencia de la democracia y la legalidad, para lograr un Estado sólido de derecho.

De esa forma, de la independencia judicial mencionada, también se requiere que el juez sea imparcial a la hora de tomar sus decisiones, ya que el derecho que las personas tienen a ser juzgadas por un tribunal imparcial implica que los jueces que no tengan intereses en juego en un caso en particular.

Por lo anterior, se vería afectada la garantía que sean los funcionarios más idóneos quienes sean los electos como magistrados, de acuerdo al artículo 113 de la Constitución Política y también por los pronunciamientos que la Corte de Constitucionalidad ha realizado con referencia a la norma citada.

Los comisionados se deben de enfocar, que, para el otorgamiento de los altos puestos de magistrados, deben de observar los méritos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que para el efecto la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en el expediente 2143-2010, dentro de la sentencia de fecha trece de junio de dos mil catorce, que se deben de evaluar ciertos puntos, y con ellos se indica el aspecto ético, que comprende lo relacionado con la moral, honorabilidad, rectitud, independencia e imparcialidad comprobadas.



### Normativa nacional

La figura del conflicto de interés en Guatemala no está desarrollada en la normativa vigente. El 14 de septiembre de 2019 fue publicada una noticia en relación a que un grupo de diputados presentará una iniciativa de ley a efecto de evitar el conflicto de interés.<sup>6</sup> “La propuesta busca evitar hechos ilícitos que un funcionario pueda cometer desde el cargo que ocupa, entre otros, vincular a familiares o amigos y favorecerlos de forma ilícita. Además, uno de los propósitos es evitar la contratación de parientes en la administración pública, especialmente que integren una junta de licitación, en la adjudicación de contratos, ejecución presupuestaria, en las decisiones de aprobación de licencias, entre otros”.<sup>7</sup>

Lo más próximo al conflicto de interés está regulado en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos y la Ley de Servicio Civil. Sin embargo, las disposiciones resultan insuficientes.

Con relación a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos, son importantes los siguientes artículos:

*“Artículo 7. Funcionarios públicos. Los funcionarios públicos conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo”.*

*“ARTICULO 17. Casos que generan responsabilidad administrativa. D) La contratación de la esposa o hijos como subalternos en relación de dependencia, o la contratación de personas sin calificación necesaria cuando los cargos requieran calidades cualidades, profesión, conocimientos o experiencias especiales, y de personas que se encuentran inhabilitadas conforme a la ley”.*

*“ARTICULO 18. Prohibiciones de los funcionarios públicos. Además de las prohibiciones expresas contenidas en la Constitución Política de la República y leyes especiales, a los funcionarios y empleados públicos les queda prohibido:*

- a) Aprovechar el cargo o empleo para conseguir o procurar servicios especiales, nombramientos o beneficios personales, a favor de sus familiares o terceros mediando o no remuneración.*
- b) Utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo o empleo en las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas, para tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros.*
- c) Solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona, dádivas, regalos, pago, honorarios o cualquier otro tipo de emolumentos adicionales a los que normalmente percibe por el desempeño de sus labores.*
- d) Utilizar bienes propiedad del Estado o de la institución en la que labora, tales como vehículos, material de oficina, papelería, viáticos y otros, fuera del uso oficial, para beneficio personal o de terceros.*
- e) Usar el título oficial del cargo o empleo, los distintivos, la influencia, o el prestigio de la institución para asuntos de carácter personal o de terceros.*
- f) Utilizar los recursos públicos para elaborar, distribuir o enviar regalos, recuerdos, tarjetas navideñas o de cualquier otra ocasión.*
- g) Utilizar el tiempo de trabajo para realizar o prestar asesorías, consultorías, estudios y otro tipo de actividades a favor de terceros, que le generen beneficio personal.*
- h) Disponer de los servicios del personal subalterno par afines personales o en beneficio de terceros.*

<sup>6</sup> Disponibilidad y acceso: <https://lahora.gt/iniciativa-de-ley-buscaria-evitar-conflicto-de-intereses/>

<sup>7</sup> Disponibilidad y acceso: [https://www.congreso.gob.gt/noticias\\_congreso/3727/2019/3](https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/3727/2019/3)



- i) Realizar trabajo o actividades remuneradas o no en horarios que no son de su trabajo, que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades, o cuyo ejercicio pueda poner en riesgo la imparcialidad de sus decisiones por razón del cargo o empleo.
- j) Utilizar los materiales de oficina, vehículos, teléfonos, fondos públicos, el tiempo pagado por el Estado al funcionario o a sus subalternos, los conocimientos, información el título oficial, papelería, el prestigio o la influencia de la institución para el logro de objetivos políticos personales o del partido al que pertenece.
- k) Solicitar a otros gobiernos o empresas privadas colaboración especial para beneficio propio o para un tercero.
- l) Actuar como abogado o representante de una persona que ejerce reclamos administrativos o judiciales en contra de la entidad a la cual sirve estando en el ejercicio del cargo o empleo.
- m) Nombrar y remover al personal por motivos o razones político partidistas o ideológicos.
- n) Discriminar en la formulación de políticas y en la prestación de servicios a personas o sectores de personas, por razón de su afiliación política así como por cualquier otra causa que infrinja el derecho de igualdad.
- o) Utilizar recursos humanos y financieros del Estado para la promoción política, personal o del partido político al que pertenece.

Respecto a la Ley de Servicio Civil cabe destacar el artículo 66 que regula "Prohibiciones Especiales. A los servidores públicos les está especialmente prohibido:

1. Solicitar o recibir dádivas, regalos o recompensas de sus subalternos o de los particulares y solicitar, dar o recibir dádivas de sus superiores o de los particulares, con el objeto de ejecutar, abstenerse de ejecutar o ejecutar con mayor esmero o retardo cualquier acto inherente o relacionado con sus funciones.
2. Ejecutar cualesquiera de los actos descritos en el inciso anterior, con el fin de obtener nombramiento, aumento de salario, promoción u otra ventaja análoga.
3. Solicitar o recoger, directa o indirectamente, contribuciones, suscripciones o cotizaciones de otros servidores públicos, salvo las excepciones muy calificadas que establezcan los reglamentos.
4. Ejercer actividades o hacer propaganda de índole política durante y en el lugar de trabajo.
5. Tomar en cuenta la filiación política de los ciudadanos para atender sus gestiones, favoreciéndolos o discriminándolos.
6. Coartar directa o indirectamente la libertad de sufragio.
7. Ninguna persona podrá desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que los horarios sean compatibles".

Finalmente, el artículo 20 del Acuerdo 22-2013, Normas de comportamiento ético del Organismo Judicial, indica: "Conflicto de intereses. El personal del Organismo Judicial no debe utilizar su cargo para fomentar el éxito de negocios privados o para su beneficio personal. En tal sentido, le está expresamente prohibido:

- a) Incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad;
- b) Aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dádiva, presente, ofrecimiento o promesa, para realizar un acto relativo a su cargo o abstenerse de un acto que debiera practicar;
- c) Aceptar donación, empleo, cargo o comisión para sí, su cónyuge o parientes legales, que procedan de cualquier persona física o jurídica cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, sujetas a juicio, reguladas o supervisadas por el funcionario o empleado; y
- d) Intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, traslado, ascenso, cese o sanción de cualquier funcionario o empleado, cuando tengan interés personal, familiar o de negocios, o puedan derivar alguna ventaja o beneficio para ellos, su cónyuge o parientes legales".



### Normativa internacional

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece en el artículo 8 numeral 5 *"Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos"*.

Por su parte, la Convención Interamericana Contra la Corrupción establece en el artículo 3 establece medidas para prevenir la corrupción, entre ellas se encuentra la creación de *"Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflicto de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones (...)"*.

El Código Internacional de Conducta para los Titulares de Cargos Públicos de las Naciones Unidas estipula *"Los titulares de cargos públicos no utilizarán su autoridad oficial para favorecer indebidamente intereses personales o económicos propios o de sus familias. No intervendrán en ninguna operación, no ocuparán ningún cargo o función ni tendrán ningún interés económico, comercial o semejante que sea incompatible con su cargo, funciones u obligaciones o con el ejercicio de éstas"*.

- **Conclusiones.**

Se evidencia el conflicto de interés por parte de la aspirante, porque reúne las calidades, de aspirante y comisionada, dicha circunstancia es indebida desde el plano ético y profesional. Ya que atenta de manera directa al Estado democrático de Derecho al tener esta doble condición por las facultades que reúne en ambos procesos, otorgándole poderes que inciden a sus intereses personales por la influencia que el puesto otorga.

Al elegir a VITALINA ORELLANA Y ORELLANA se estarían violentando los principios sobre la independencia judicial, independencia a la garantía de elegir a candidatos idóneos, capaces y honorables contemplados en el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Con el objeto de garantizar la imparcialidad del proceso de comisiones de postulación, se hace necesario que en todos los casos que en los que se den estas situaciones sean evidenciados y erradicados. Ya que se puede evidenciar la existencia que, al dejar participar a dicha candidata, existe un conflicto de interés, que es el que se trata de evitar, que sea el interés en particular que afecte la selección de magistrados idóneos en el proceso.

También, la independencia judicial, ya que en tanto existen estos conflictos de interés, surgirían conflictos políticos que estarían condicionando la aplicación de una justicia que fuere pronta y cumplida.





**Solicitud.**

Por lo anterior descrito, se solicita a esa Comisión que la información y los argumentos vertidos, sean tomados en cuenta para considerar como NO IDONEA a VITALINA ORELLANA Y ORELLANA para ser incluida en la nómina de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, candidaturas a ser entregadas al Congreso de la República para el período 2019-2024.

**Medios de prueba que se adjuntan para respaldar el impedimento:**

- Fotocopia simple del listado de comisionados que integran la comisión de postulación para selección de magistrados de las Cortes de apelaciones para el período 2019-2024.
- Fotocopia simple del listado de candidatos a elección de magistrados de la corte suprema de Justicia.
- Comunicado de Prensa CICIG <https://www.cicig.org/comunicados-2014-c/preocupacion-sobre-procesos-de-seleccion-de-candidatos-para-corte-de-apelaciones-y-corte-suprema-de-justicia/>
- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala, año 2015, "Comisiones de postulación, sistematización de los proceso 2014-2015", Guatemala, Guatemala.





LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PERIODO 2019-2024

**NOTIFICA**

Que las personas que aparecen a continuación, han sido incluidas en esta nómina, en virtud de reunir los requisitos previstos en la ley y establecidos en la Convocatoria, para continuar el proceso de selección:

N.º de EXPEDIENTE	NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE	N.º de EXPEDIENTE	NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE	N.º de EXPEDIENTE	NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE
1	Coralia Irazema Pérez Calderón	79	Zonia de la Paz Santiago Cortés de Bocanegra	157	José Antonio Pineda Barahay
2	Eduardo Estrada Revolorio	80	Aleida Rosendo Ochoa López	158	José Alfredo Aguilar Orellana
3	William Gilberto Bobadilla López	81	José Alejandro Cortés Herrera	159	César Haroldo Millán Requena
4	Axel Ottavio Masas Arce	82	Carlos Partido Rodríguez Mesa	160	Ned Adalberto Ventura Loya
5	Nicolás Balán Estrada	83	Juan Luis de la Roca	161	Odilia Yolanda Gómez Herrera de Molina
6	Alonso Emilio de León Díaz	84	Eida Nidia Nájera Sagastume de Portillo	162	Freddy Ramón Sánchez Carén
7	Julio Bonifacio Baquero Ruluy	85	Zully Eugenia Cantoral Campos	164	Claudem Elvira González Jacobo
8	Héctor Haroldo Calderón Morales	86	Perla Nether Howell Maldonado	165	Irma Elizabeth Palencia Orellana
9	Edna Marisol Barco Corado	87	Walter Paulino Jiménez Tenaj	166	Nidia Lisette Arvelo Flores
10	Robinson Myrón Rivera Fuentes	88	José Felipe Baquero Baquero	167	Claudia Miriam Miranda Balcázar de Hernández
11	Martha Esther Castro Castillo	89	Xosé Desiré Vázquez de Kestler	168	Calderín Estuardo García Luna
12	Roberto René Alonzo del Cid	90	Héctor Hugo Pérez Aguilera	169	Rosamarie de León Cano
13	María Elita Sandoval Amuña	91	Melchor Chavarria López	170	Dora Lisset Nájera Flores
14	Alejandro Marquín Ariza	92	Miguel Ángel Calvez Aguilar	171	Maritza Alberto López Fuentes
15	Bertha Concepción Calderón	93	Annelisa Yolanda Viquez Grén	172	Emy Yohana Gramam Roxalen
16	Miguel Eduardo González Méndez	94	Sara Graciela Mol Yee	173	Lilian Magdalena Mirera Lucas
17	Horacio Enrique Sánchez	95	Belen Araceli Ocas Roman	174	Marlon José Barahona Colón
18	Enrique Pérez Sautin	96	Tarlen Mado Hernández Rivera	175	Donatelo Armando González Medina
19	Flor de María García Villatoro	97	Héctor Ángel Castro Lemus	176	Conrado Armando Reyes Sagastume
20	Jaime Amílcar González Dávila	98	Sonia Doracina Guerra de Mesa	177	Comunio Rafael Ramos Arreaga
21	Ricardo Gómez Damman	99	Ana María Rodríguez Cortés	178	Rosa Mariela Joseph Rivera Acevedo
22	Yolanda Orellana y Orellana	100	Jaime Fernando Echeverría Argueta	179	Rosendo Isidro Chaviz Pérez
23	Nicolás Rivera Bernal	101	Normy Judith Palacios Colindres	180	Estuardo Adolfo Cardenas
24	Anabella Emeralda Cardona Cámara	102	Juana Solís Rosales	181	José Myrón Pa Llan
25	Wilean Arcadio Rodríguez Marroquín	103	Teodilo Ildefonso Ojeda Maldonado	182	Nidia Violeta Domínguez Trujano
26	Santos Octavio Flores Samientos	104	María Eugenia Castellanos Cruz	183	Brenda Dery Muñoz Sánchez de Molina
27	Oscar Leonel Solís Corzo	105	Caron Orfelia Guzmán Sanfuentes	184	Reyis Azahy Ximénez Estrada Barrios de Brío
28	Mano Ulisario Sánchez Jiménez	106	Juan Antonio Rodríguez Parra	185	Selvin Wilfredo Flores Días
29	Eduardo Guzmán Carascota	107	Carla Estheryza Valladares Orellana	186	Carlos Horacio Castillo García
30	Rosel Emilio Estrada Arriaza	108	Héctor Ulises Gómez	187	Ronald Manuel Colindres Roca
31	Miguel Ángel Guadalupe Navarro	109	Juan Roberto Orellana Gabriel	188	Hector Ovidio Pérez Caid
32	María Lidia Nájera	110	María Antonia Cuevas Vidal	189	Walter Fabricio Rosales Hernández
33	Luis Alberto Calderón Maldonado	111	Carolina Palacios Corzantes	190	Nery Osvaldo Medina Méndez
34	Sergio Antonio Aguilar Martínez	112	Ella Noemí Rella Alonso de Galdames	191	Ramón Francisco González Pineda
35	Rita María García Aguilar	113	María Rosalva Lima Garza	192	Alba Susana López Rincón
36	Ulises Xiomara Caranza Iquintero	114	Irma Jeannette Valdez Rodas	193	David Gómez Murillo
37	Thelma Sharlene Ochoa Alajola	115	María Elena Orellana Morales	194	Herman Rogoberto Tani Páez
38	Héctor Antonio García Moya	116	Freddy Waldeemar Fernández Ortiz	195	Ignacio Gallo Almonte
39	Ayda Mariana López Cisneros de San José	117	César Augusto López López	196	Santos Salbach Góñez
40	Victor Mariposa Flores Embriles	118	Oscar Roberto Cruz Oliva	197	Edgar Estuardo Méndez Solórzano
41	Edgar Osvaldo Aguilar Rivera	119	Crista Mariana Irujo	198	Nery Alberto Menéndez
42	Cristina González Orellana	120	Guillermo Demetrio Ebrara Alenda	199	Ana Marina Pimentel Piedra Santa
43	Héctor Alcántara Elías Wilson	121	Aura Elena Herrera Flores	200	Maritza Miriam González Ochoa
44	Edgar José López Espalita	122	Luis Arturo Archila Álvarez	201	Miguel Antonio Ramos Solórzano
45	Sandra Annabella Ríos de Villatoro	123	Fernando Adán Cruz Navarro	202	Victor Hugo Salazar Portillo
46	Rita Herlinda Acevedo Nolasco de Zaldívar	124	Virginia Amparo de León Lora	203	Carlos Antonio Aguilar Villalobos
47	Jorge Eduardo Tuzo Coyote	125	Maria Florentina Caballeros Salazar de Cabres	204	Nidia Amalia Alvarado de León
48	Edgar Alfredo Campos Salazar	126	Carlos Enrique Calado Mac	205	Jorge Aparicio Alvarado Villalobos
49	Zonia Harolde Toledo Cruz	127	Zola Coferina López de la Roca	206	Joacim Medina Bermúdez
50	Rafael Morales Solares	128	Hugo Roberto Juárez	207	Guido Lombardo Torres Carillo
51	Alfredo Solórzano Flores	129	Rosalia del Carmen Viquez Carrillo	208	Erwin León Romero Morales
52	Alvaro Ricardo Cardón Paredes	130	Walter Oliver Winkler Díaz	209	Jenny Noemí Alvarado Tami
53	Walter Brenner Viquez Gómez	131	Giovanni Francisco Soto Santos	210	Silvia Tojin Noriega
54	Edgar Orlando Ruano Godoy	132	Luis Eduardo López Ramos	211	Arin Beatriz Santos Grén
55	Walter Estuardo Castellanos Ventanas	133	María Susana Vides Lavareda	212	Virginia Ester García Méndez
56	Carlos Ronaldo Paiz Xul	134	Miguel Benjamín Duarte Barrera	213	Cathy Rossana López Rodríguez
57	Aura Mariana Mandila Solares de Rodríguez	135	Néstor Federico Méndez Alvarado	214	Legnel Rodríguez Santa Rodríguez
58	Carlos Humberto Rivera Canillo	136	Francisco Rolando Durán Méndez	215	Ricardo Isidro Casti Caid
59	Aura Cristina Ruano León de la Cruz	137	José Luis de Jesús Samuza Palacios	216	Erica Catalina Orellana Acevedo
60	Otto Cecilio Méndez Morales	138	Alberto Benito de la Paz	217	Marco Antonio de León Orellana
61	Néstor Ricardo Echeverría Méndez	139	Edna Palacios López Rodríguez	218	Trinidad Kather Flores Estrada
62	Arturo Eduardo Pardo de León	140	Guillermo Adolfo Morales Disarte	219	Luis Felipe Lepe Monteroso
63	Glady Elizabeth Monterroso Velasco de Morales	141	Sergio Amador Tami Aguayo	220	Cecilia Osorio Monterroso de Salazar
64	Dina Monterroso Pineda	142	Rogelio Cón S	221	Ingrid Llanova Soto Corón
65	Cristina Elizabeth Echeverría Ramírez de Mendonza	143	Ernest Obdulio Barrientos Padilla	222	Oscar René Frutos Durán
66	Reve Guillermo Gón Palacios	144	Gladiolinda Alberto Ovando	223	Nidia Cecilia de León Tami
67	Luis Mauricio Corado Campos	145	María Elena Guerra López	224	Julia Mariana Maldonado Echeverría
68	Gonzalo Adolfo Dávalos Gálvez	146	Carlos Alberto Gálvez Rorán	225	Fabian Noel Pérez Corón
69	Lesbia Elizabeth Guzmán Valle	147	Pedro Edmundo Sum	226	Berta Ester Velásquez Sagastume
70	Alex Antonio Morales Álvarez	148	Wilfredo Ponce Escobar	227	Mirza Eugenia Irujo y López
71	Carlos Guillermo Guerra Jordán	149	Elsa Nina Castillo Rodas	228	Myrón Mauricio Mola Moraza
72	Carlos Enrique Cufajay Chacón	150	Erika Lorena Altán Dávila	229	Emma Patricia Guillermo de León de Chee
73	Ylma Rosana Reyes González	151	María Obdulio Reyes Aldana	230	Ariel Benítez Méndez de la
74	Flor de María Gálvez Barrios	152	Jorge Rolando Sequén Montoy	231	Rolando López Morán
75	Claudia Lucinda Paredes Costa Neda	153	Glória Dalila Sánchez Barrientos	232	Christian Alejandro Llanza Moraga
76	Juan Carlos González Rodríguez	154	Francisco Armando Martínez Huo	233	Edna Marilou Irujo y López
77	Dama Juana Guzmán Flores	155	Sofía Toledo Castañeda	234	Héctor José Monterroso Hernández

La presente publicación se realiza para los efectos legales de la Ley de Comisiones de Postulación, para que cualquier persona que conozca impedimentos, lo haga saber a la Secretaría ubicada en la 40 Calle 10-02 zona 8 Campus Central de la Universidad Mesoamericana, durante los días 1, 2, 3 y 4 de febrero del 2020 de 8:00 a 17:00 horas. Quien se dirija a la Comisión deberá realizarlo de forma escrita y en versión digital, identificándose con nombre y apellido, demás generales y Documento Personal de Identificación.

Si compareciera en representación de Persona Jurídica, deberá acreditar su calidad ante la Comisión.

Dr. Félix Javier Serrano Ursua  
Presidente de la Comisión

Lic. Mario Raúl García Morales  
Secretario de la Comisión

Ciudad de Guatemala, 31 de enero de 2020.





## COMISIÓN DE POSTULACIÓN

para Magistrados de Sala y Otros Tribunales de la misma categoría

[Inicio](#)
[Leyes y Reglamentos](#)
[Documentos Descargables](#)
[Comisionados](#)
[Transmisión en Línea](#)
[Candidatos](#)
[Contáctenos](#)

### Comisionados

MSc. Ing. Murphy Olympe Polz Recinos  
 Magistrada Silvia Patricia Valdez Quezada  
 Magistrado Nery Osvaldo Medina Méndez  
 Magistrada Vitalina Orellana y Orellana  
 Magistrada Dolia Marina Dávila Salazar  
 Magistrado Josué Felipe Baquix Baquix  
 Magistrado Sergio Amadeo Pineda Castañeda  
 Magistrada Silvia Verónica García Molina  
 Magistrado Nester Mauricio Vásquez Pimentel  
 Magistrado Raulfo Rafael Rojas Cetina  
 Magistrado José Antonio Pineda Barales  
 Magistrada María Eugenia Morales Aceña  
 Magistrado Manuel Reginaldo Duarte Barrera  
 Lic. Dimas Gustavo Bonilla  
 Lic. Jorge Guillermo Arauz Aguilar  
 Dr. Milton Estuardo Argueta Pinto  
 Lic. Mario Raúl García Morales  
 Lic. Enrique Sánchez Usera  
 Dra. Jary Leticia Méndez Maddaleno  
 Lic. Luis Fernando Cabrera Juárez  
 Lic. Luis Antonio Ruano Castillo  
 Lic. Luis Roberto Aragón Solé  
 Licda. Ana Mercedes Suasnavar Palma  
 Lic. Juan Carlos Rodil Quintana  
 Lic. David Ricardo González Tablada  
 Licda. Lidia Judith Urizar Castellanos  
 Licda. Norma Beatriz Santos Quezada  
 Lic. Hugo Enrique Cabrera Navas  
 Lic. Carlos Alfredo Jarucqui Muñoz  
 Licda. Jennifer Candelaria Dell'acqua Lima  
 Lic. Luis Fernando Ruiz Ramírez  
 Carlos Anibal Hernández Martínez  
 Licda. Gladys Verónica Ponce Mejicanos  
 Licda. Gloria Elizabeth Ortiz Mérid  
 Licda. Olga del Rosario Alfaro Pineda  
 Lic. Henry Giovanni Dubón Ruano  
 Lic. Juan Salvador Soto Hernández



Archivo histórico de la CICIG hasta el 3 de septiembre 2019.



Search ...



≡ MENU

▣ Historial CICIG |

PREOCUPACIÓN SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA CORTE DE APELACIONES Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



## PREOCUPACIÓN SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA CORTE DE APELACIONES Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

septiembre 16, 2014 ▣ Editor O □

📄 COMUNICADO DE PRENSA 032

El día de hoy, en conferencia de prensa, el Comisionado Iván Velásquez Gómez manifestó la preocupación acerca del desarrollo de los procesos de selección





de candidatos para Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia que se adelantan actualmente en las Comisiones de Postulación: “Lo hacemos con el mayor respeto por la institucionalidad del país, con el único propósito de contribuir a la construcción de un sistema de justicia independiente, imparcial, idóneo, apto para enfrentar el incremento siempre ascendente del crimen organizado”.

El Comisionado hizo un llamado para que un verdadero proceso de selección llegue a la esencia vital de los candidatos a ejercer una de las funciones más sublimes: la potestad de juzgar a sus semejantes con fuerza de autoridad, de disponer de vidas y bienes. Para lo cual se debe asegurar que los escogidos sean los ciudadanos más capaces, más idóneos y honorables de quienes aspiran a cumplir tan elevada misión.

Un proceso de selección para quienes ocuparán los más altos cargos de la administración de justicia debe garantizar que los aspirantes acrediten sus verdaderas calidades; que si se trata de jueces que quieren ascender en el organismo judicial -aún permanecer en sus magistraturas- puedan demostrar ante los postuladores su experiencia, su sabiduría para resolver conflictos, sus conocimientos, sus habilidades para el manejo de situaciones críticas, su criterio. Que pueda decir frente a sus evaluadores, prueba en mano: este soy yo y por esto no sólo aspiro sino que merezco ser magistrado de la República de Guatemala. Que presente su declaración patrimonial y que esta pueda verificarse, Y que la sociedad ejerza su veeduría para confirmar que efectivamente quien pretende ser su juez es digno de que la juzgue.

El Comisionado Velásquez exhortó -con la mayor buena voluntad- a las autoridades nacionales y a la sociedad en su conjunto para que inicie un serio proceso de reflexión sobre el sistema de justicia vigente en el país y, con un “criterio patriótico altruista, más allá de los mezquinos intereses personales o sectoriales” se emprenda una profunda reforma que modernice el aparato de justicia y haga realidad el mandato contenido en el inciso 2° del artículo 203 de la Carta Política: “Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público”.

## **Lectura de interés: Denuncias entregadas al Ministerio Público**

### **Cuestionamientos**

Considera que el proceso de escogencia de los altos funcionarios judiciales debería ser un acto sublime de la democracia en el que un grupo de selectos ciudadanos -académicos de las facultades de derecho, administradores de justicia y representantes de los abogados- se aplicaran con responsabilidad,



pero también con devoción y entusiasmo, a examinar integralmente a los mejores ciudadanos que habrían de ocupar esas dignidades.

Por esta razón hace unos meses la CICIG propuso una "Guía de buenas prácticas éticas y procedimentales para Comisiones de Postulación", en la que señalaba cuatro elementales premisas: Acreditación de méritos de vida personal y profesional; revisar, escrutar y escudriñar con una entrevista que confronte al candidato con su realidad; garantizar la transparencia de los procesos mediante la adopción previa de reglas claras y uniformes y que como lo ha exigido la Corte de Constitucionalidad y lo enseñan las modernas teorías del Estado Democrático de Derecho, los comisionados expresen de viva voz las razones de su voto.

En su exposición el Comisionado mencionó la decisión de la Corte de Constitucionalidad del 13 de junio del 2014, expediente 2143-2014: "Se reitera que los comisionados deberán efectuar una evaluación objetiva y razonable, apegada a las constancias que se presenten por los participantes, lo investigado por ellos, las entrevistas realizadas y considerado adecuadamente los aspectos que se reseñan, y tomar en cuenta que el solo hecho de participar implica que el postulante ha satisfecho los requisitos para haber obtenido un grado universitario, y sin que esa evaluación sustituya la obligación que tiene cada uno de los integrantes de la Comisión de Postulación de justificar de manera pública, razonada y expresa en el momento de la votación, por qué se elige o por qué no se elige a un candidato determinado ...".

### **Lectura de interés: Foro sobre justicia en Mazatenango**

En lugar de ello, mencionó, ha habido cambios del cronograma durante el proceso, acceso vetado al público; poca fluidez en el acceso ciudadano a la información, inadecuados perfiles de los aspirantes, tablas de gradación deficientes, registro incompleto de las votaciones, entre otros aspectos.

Algo que preocupa es que si bien, no existe norma legal que prohíba postular a su postulador, no parece ético ni respetuoso de un Estado Democrático de Derecho que un comisionado reúna en sí mismo la doble condición de elector y de candidato. No se trata de una violación del derecho a optar a empleos o cargos públicos que el mismo artículo 113 constitucional consagra. Simplemente, el abogado o magistrado de apelaciones que íntimamente conocía su aspiración, debió abstenerse de participar en el proceso de representación de su gremio y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que pretendía su reelección, debió excusarse ante el pleno poniendo de presente sus pretensiones laborales.

Otro aspecto que resaltó: A la fecha, absolutamente todas las etapas esenciales del trámite se encuentran cuestionadas ante la Corte de



Constitucionalidad: la integración de las Comisiones tanto por razones de parentesco como de membresía a los gremios que escogen representantes; el perfil diseñado por las comisiones; la carencia de exigencia de acreditación de requisitos; las tablas de gradación; el conflicto de intereses de los comisionados-candidatos; la no realización de entrevistas y la amenaza de incumplimiento de la orden impartida por la Corte de Constitucionalidad para que se vote razonadamente y de viva voz por los candidatos.

### **Propuestas**

Dos elementos de reflexión adicionales que podrían conducir a una conclusión: el agotamiento del modelo de comisiones de postulación.

De un lado, si la composición de estas comisiones está dada por la cantidad de facultades de derecho existentes en el país, es segura que en los próximos 5 años estas rebasarán el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será absolutamente caótico su funcionamiento. Desde el pasado proceso del 2009 hasta hoy, se han creado 3 nuevas facultades de derecho, alguna de ellas carece inclusive de estudiantes, y en todo caso no tienen a la fecha ninguna promoción de graduados y mucho menos algún alumno colegiado; y, sin embargo, por el solo hecho de su creación ya participan en la escogencia de magistrados de salas de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia.

### **Lectura de interés: Postuladoras deben garantizar selección de candidatos idóneos**

De otro lado, parece un hecho que el proceso ha sido cooptado por intereses externos, ajenos a los postulados de una justicia independiente, imparcial, justa y cumplida.

La CICIG, en ejercicio del mandato que le otorga el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala suscrito el 12 de diciembre del 2006, particularmente en cuanto al fortalecimiento del Estado de Derecho, exhorta al Estado y a la sociedad de Guatemala a que emprendan con carácter de urgencia una reforma profunda en su sistema de justicia que permita -por lo menos- se robustezca y amplíe la carrera judicial y se implemente un órgano permanente que pueda garantizar que el ingreso a la misma se realice de manera objetiva, autónoma, fundado únicamente en los meritos de los candidatos y libre de toda injerencia política. Esta sería una solución a mediano plazo.

Pero al corto plazo esta es la propuesta:

01. Solicitar a los candidatos que acrediten documentalmente sus méritos de capacidad e idoneidad como abogado, magistrado o juez, y que acrediten su estado patrimonial vigente.



02. Desarrollar un proceso de evaluación de cada candidato según la documentación aportada a través de una metodología que contenga criterios verificables; que además permitan un ejercicio del principio de publicidad y de auditoría social.
03. Entrevista activa que permita cotejar y validar lo documentado por el candidato respecto de sí mismo y profundizar en sus fortalezas para el cargo.
04. Como requisito fundamental para el debido cumplimiento de una instrucción directa de la Corte de Constitucionalidad contenida en una resolución de fecha 13 de junio 2014, se debe emitir voto fundamentado, justificado y publico.

Si bien el proceso podría demorarse, existe fundamento legal para alargarlo más allá del 13 de octubre.

#### GALERÍA DE FOTOS:



 print

**SHARE:**     

**TAGS:** Comisiones de postulación

#### Artículo anterior

Medios reportan la desarticulación de red criminal

#### Artículo más reciente

NORUEGA FORTALECE LA JUSTICIA GUATEMALTECA





**Datos de las personas o entidades que presentan el impedimento:**

<b>1. Nombre:</b>	Carlos Rolando Yax Medrano
<b>Documento Personal de Identificación:</b>	2995 52969 0101
<b>Profesión:</b>	Estudiante
<b>Estado Civil:</b>	Soltero
<b>Domicilio:</b>	Guatemala, Guatemala
<b>Dirección para ser notificado:</b>	13 calle 2-14 zona 1, ciudad de Guatemala
<b>Teléfono:</b>	2463-2323
<b>Correo electrónico:</b>	contacto@alianzareformas.org

**Firma de la persona que presenta el impedimento:**









COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA SELECCIÓN DE MAGISTRADOS  
A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA  
**2019-2024**

**FICHA DE PRESENTACIÓN DE IMPEDIMENTOS  
DE PERSONAS INDIVIDUALES O JURÍDICAS**

Fecha: 04/02/2020 Número de Expediente: 22

Nombres y Apellidos del Postulante: VITALINA ORELLANA Y ORELLANA

Denunciante: CARLOS ROLANDO YAX MEDRANO DPI: 2995829690101

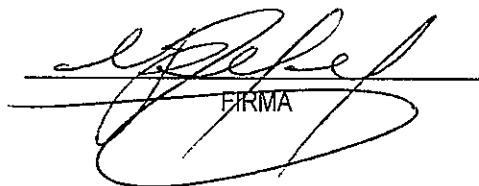
Institución: \_\_\_\_\_

Representante Legal: \_\_\_\_\_

Dirección Física: 13 CALLE 2-14 ZONA 1, CIUDAD DE  
GUATEMALA

Dirección Electrónica: CONTACTO @ ALIANZA REFORMAS.ORG

Teléfono (s): 2463 2323

  
FIRMA

**NOTA IMPORTANTE:**

Adjuntar copia legible del DPI con fotografía clara.

Fotocopia legalizada de nombramiento de Representante Legal.

COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA SELECCIÓN DE MAGISTRADOS  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

**RECIBIDO**  
04 FEB 2020

RECIBE: NORMA HORA: 4:58



Guatemala, 4 de febrero de 2020

Señores/as miembros/as de la Comisión de Postulación para selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia, período 2019-2024, con base en lo establecido en la Constitución Política de la República, la ley de Comisiones de Postulación decreto número 19-2009, la Ley de la Carrera Judicial decreto número 32-2016 y en atención a la publicación de fecha 31 de enero de 2020 en diarios de mayor circulación, en la cual invita a cualquier persona jurídica o individual a presentar impedimentos a los aspirantes que continúan en el proceso de selección, se hace saber a la Comisión de la existencia del siguiente:

**IMPEDIMENTO:**

<b>Datos del o la aspirante contra quien se presenta el impedimento:</b>	
<b>Nombre:</b>	VITALINA ORELLANA Y ORELLANA
<b>Número de expediente</b>	22
<b>Motivo:</b>	
<p>La aspirante VITALINA ORELLANA Y ORELLANA no es idónea por poseer conflicto de interés en el proceso, ya que es comisionada en la Comisión de Postulación de Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados y de igual categoría y candidata a magistrada de Corte Suprema de Justicia.</p>	
<b>Hechos:</b>	
<p>La aspirante actualmente participa como comisionada, puntualmente como representante por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en la comisión para elegir magistrados de la Corte de apelaciones y otros Tribunales Colegiados, y al mismo tiempo es candidata para magistrada de la Corte Suprema de Justicia.</p>	
<p>La aspirante reúne las calidades de electora y candidata en este proceso, cuestión que aunque aún no es prohibida expresamente en la ley, es indebida desde el plano ético y profesional. Ya que atenta de manera directa al Estado democrático de Derecho al tener esta doble condición, por las facultades que reúne en ambos procesos, otorgándole poderes que inciden a sus intereses personales por la influencia que el puesto otorga.</p>	
<p>El Diccionario del español jurídico establece que por conflicto de intereses se debe entender "Colisión entre las competencias decisorias que tiene el titular de un órgano administrativo y sus intereses privados, familiares o de otro orden, que pueden afectar a la objetividad de las decisiones que adoptan. El conflicto de intereses determina ordinariamente el deber de abstención en la toma de decisiones, o incluso la incompatibilidad para mantener la titularidad de un determinado cargo".<sup>1</sup></p>	
<p>Ahora bien, Transparencia Internacional ha explicado el Conflicto de Interés de la siguiente forma: "Situación en la que un individuo o la entidad para la que trabaja, ya sea un gobierno, empresa,</p>	

<sup>1</sup> Real Academia Española. Diccionario del español jurídico. Conflicto de intereses. Disponibilidad y acceso: <https://dej.rae.es/lema/conflicto-de-intereses>





medio de comunicación u organización de la sociedad civil, se enfrenta a elegir entre los deberes y demandas de su posición y sus propios intereses privados".<sup>2</sup>

Específicamente en el ámbito público, existe un conflicto de interés cuando "un funcionario público hace uso de su posición para beneficiar sus intereses personales, como contratar de proveedor a la empresa de un familiar directo, o interferir en la regulación de una industria con la idea de trabajar para ella una vez que acabe su mandato público".<sup>3</sup>

Asimismo, existe conflicto de interés "cuando un funcionario público obtiene un beneficio de manera ilegítima como resultado de una decisión que ha tomado en función de su cargo o competencias".<sup>4</sup> En ese sentido, el conflicto de interés se relaciona con la ética pública y, por otro lado, se vincula con el problema de corrupción.

Por su parte, Movimiento Pro Justicia explica que, según la Oficina de Ética de Naciones Unidas, el conflicto de interés es una situación en donde los intereses privados de una persona interfieren o puede entenderse que interfieren en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

Además, señala que, según lo preceptuado en el Artículo 17 de la Ley de Comisiones de Postulación, *"...no podrán ser nominadas las personas que integren las comisiones de postulación. Por aparte, el Decreto 16-2005, Ley de garantía de imparcialidad de las comisiones de postulación, prohíbe que los funcionarios contraten o nombren en cargos a quienes los hubieren favorecido con su voto en procesos de postulación. El espíritu de ambos cuerpos legales no admite dudas: el mandato es cerrar espacios al tráfico de influencias, al conflicto de interés y a toda forma de nepotismo. El espíritu es proteger la igualdad y asegurar imparcialidad y objetividad"*<sup>5</sup>.

El conflicto de intereses entre comisiones es palpable en el actual proceso, un ejemplo sucedido fue en las sesiones dos y tres de fechas 21 y 28 de agosto de 2019, esta comisión discutió la aprobación de un cronograma de trabajo con fechas claves como la presentación de nómina al Congreso de la República, dichas sesiones fueron entorpecidas por la intervención de comisionados representantes del Colegio de Abogados y Cortes de Apelaciones, que a través de sus posturas impidieron que se determinara una fecha exacta para la presentación de la nómina.

Dicha situación fue señalada por algunos decanos miembros de la comisión quienes evidenciaron la falta de confianza ante las posturas de estos comisionados ya que de manera evidente buscaban retrasar el proceso a la espera de que la comisión de Cortes de Apelaciones determinara fecha de su entrega de nómina, esto evidencia como existe interrelación directa entre una y otra comisión, cuestión lamentable que se incrementa al existir aspirantes que puedan influir y decidir en ambas comisiones para ocupar el cargo de magistrado de Corte Suprema de Justicia consolidando y perpetuando el conflicto de interés que desde el inicio de su participación como

<sup>2</sup> Transparencia Internacional. Glosario Anticorrupción. Conflicto de interés. Disponibilidad y acceso: [https://www.transparency.org/glossary/term/conflict\\_of\\_interests](https://www.transparency.org/glossary/term/conflict_of_interests)

<sup>3</sup> División de Innovaciones para Servir al Ciudadano del BID. Los dos lados del mostrador: ¿Cómo prevenir el conflicto de interés en los funcionarios públicos? 2018. Disponibilidad y acceso: <https://blogs.iadb.org/administracion-publica/es/como-prevenir-el-conflicto-de-intereses-entre-los-funcionarios-publicos/>

<sup>4</sup> Coalición por la Transparencia, Acción Ciudadana, Cámara de Comercio de Guatemala, Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Los conflictos de interés en el sector público. Guatemala, 2004. Pág. 9. Disponibilidad y acceso: [http://www.oas.org/juridico/spanish/gtm\\_res48.pdf](http://www.oas.org/juridico/spanish/gtm_res48.pdf)

<sup>5</sup> Movimiento Pro Justicia. Conflicto de intereses y tráfico de influencias en el proceso de elección de Magistrados de la Corte de Constitucionalidad (2016-2021). Guatemala. Disponibilidad y acceso: <http://www.movimientoprojusticia.org.gt/images/Conflicto%20de%20inter%C3%A9s%20en%20proceso%20de%20integraci%C3%B3n%20de%20CC-2016.pdf>



comisionada y aspirante ostenta (estas sesiones constan en videos públicos de los archivos de la Comisión).

La aspirante pudo decidir al momento de integrar la comisión de Corte de Apelaciones y otros Tribunales Colegiados participar o no, pudiendo excusarse ante el pleno presentando sus pretensiones laborales, pero no lo hizo porque decidió involucrarse en el proceso como comisionada y así tener una ventaja sobre su elección. Esta situación es contraria al comportamiento esperado para un magistrado que puede ocupar los más altos cargos en la justicia del país y de ningún modo puede permitirse que estos perfiles que desde su inicio han utilizado las leyes a su antojo sigan manipulando las normas a la conveniencia de sus intereses con prácticas indebidas y clientelares.

La aspirante ha ignorado que como comisionada está actuando como funcionaria pública, ignorando de manera evidente lo que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 153 establece que: *"Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución."*

Los integrantes de las Comisiones de postulación, ejercen una función pública, ya que de esta se puede entender que es toda actividad temporal o permanente, remunerada y honoraria, realizada por una persona en nombre o al servicio del Estado o de sus entidades en todos sus niveles o jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal.

De lo anterior, se puede establecer que los comisionados desempeñando la función pública, existen diversas situaciones en las que los intereses públicos se enfrentan con los intereses propios del aspirante, por lo que se puede indicar que eso se vería enmarcada dentro de la definición de conflicto de interés, que para lo cual se debe hacer mención que es: cuando el interés personal de quien ejerce una función pública colisiona con los deberes y obligaciones del cargo que desempeña.

El conflicto de interés se encuentra regulado en el artículo 20 de las normas de comportamiento ético del Organismo Judicial, Acuerdo de la Corte Suprema número 22-2013 que indica: *"El personal del Organismo Judicial no debe utilizar su cargo para fomentar el éxito de negocios privados o para su beneficio personal. En tal sentido, le está expresamente prohibido: a) Incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad; b) Aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dádiva, presente, ofrecimiento o promesa, para realizar un acto relativo a su cargo o abstenerse de un acto que debiera practicar; c) Aceptar donación, empleo, cargo o comisión para sí, su cónyuge o parientes legales, que procedan de cualquier persona física o jurídica cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, sujetas a juicio, reguladas o supervisadas por el funcionario o empleado; y d) Intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, traslado, ascenso, cese o sanción de cualquier funcionario o empleado, cuando tengan interés personal, familiar o de negocios, o puedan derivar alguna ventaja o beneficio para ellos, su cónyuge o parientes legales."*

De esa cuenta, las personas que llenan ambas calidades, de comisionados y aspirantes, no pueden competir con el resto de profesionales que se presentaron en el proceso, debido a la generación de posibles prácticas que recaerían de forma indebida. Asimismo con el conflicto de



intereses que se puede suscitar, tal y como lo establece el artículo anterior, está expresamente prohibido intervenir o participar indebidamente en la selección o nombramiento de cualquier funcionario o empleado cuando se tenga un interés personal, familiar o de negocios, la cual recae en esta situación en particular, en virtud que en este proceso en específico la señora VITALINA ORELLANA Y ORELLANA, es comisionada a elegir magistrados de las salas de las cortes de apelaciones y además de eso es candidata a magistrada de la Corte Suprema de Justicia, donde abre las puertas a que se dé la práctica de negociar o de ofrecer un trato de un comisionado hacia otro comisionado para que integren la nómina de donde aspira la persona.

En el año 2014, en el proceso de comisiones de postulación para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia y magistrados de Salas de la Corte de apelaciones, fue denunciada esta mala práctica, ya que fue objetado por la forma en la que se integraron las nóminas de candidatos a magistrados para esas altas cortes, debido a que la elección se hizo entre ellos en un mecanismo conocido en ese entonces como "tú me eliges, yo te elijo"

"El yo te elijo, tú me eliges" es la forma en que los comisionados que forman parte de una Comisión se postulan como candidatos en la otra y si no resulta electo no apoya la elección de otros en la postuladora que integra. En el proceso del 2014 hubo 15 de estos casos.

La condición de integrante de la Comisión para elegir magistrados de las Cortes de apelaciones, que ostenta el aspirante en mención, le permite una condición de poder que queda enmarcada en el conflicto de intereses, por lo que la aspirante no debería de continuar participando en el proceso.

En cuanto a otras violaciones, se puede agregar que también se vería afectada la independencia judicial contenida en el artículo 203 la cual se encuentra contenida en la Constitución Política de la República de Guatemala, que se refiere a que los jueces y magistrados son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente estarán sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. Debe de ser una judicatura integral, imparcial, que garantiza la vigencia de la democracia y la legalidad, para lograr un Estado sólido de derecho.

De esa forma, de la independencia judicial mencionada, también se requiere que el juez sea imparcial a la hora de tomar sus decisiones, ya que el derecho que las personas tienen a ser juzgadas por un tribunal imparcial implica que los jueces que no tengan intereses en juego en un caso en particular.

Por lo anterior, se vería afectada la garantía que sean los funcionarios más idóneos quienes sean los electos como magistrados, de acuerdo al artículo 113 de la Constitución Política y también por los pronunciamientos que la Corte de Constitucionalidad ha realizado con referencia a la norma citada.

Los comisionados se deben de enfocar, que, para el otorgamiento de los altos puestos de magistrados, deben de observar los méritos de capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que para el efecto la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado en el expediente 2143-2010, dentro de la sentencia de fecha trece de junio de dos mil catorce, que se deben de evaluar ciertos puntos, y con ellos se indica el aspecto ético, que comprende lo relacionado con la moral, honorabilidad, rectitud, independencia e imparcialidad comprobadas.



## Normativa nacional

La figura del conflicto de interés en Guatemala no está desarrollada en la normativa vigente. El 14 de septiembre de 2019 fue publicada una noticia en relación a que un grupo de diputados presentará una iniciativa de ley a efecto de evitar el conflicto de interés.<sup>6</sup> "La propuesta busca evitar hechos ilícitos que un funcionario pueda cometer desde el cargo que ocupa, entre otros, vincular a familiares o amigos y favorecerlos de forma ilícita. Además, uno de los propósitos es evitar la contratación de parientes en la administración pública, especialmente que integren una junta de licitación, en la adjudicación de contratos, ejecución presupuestaria, en las decisiones de aprobación de licencias, entre otros".<sup>7</sup>

Lo más próximo al conflicto de interés está regulado en la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos y la Ley de Servicio Civil. Sin embargo, las disposiciones resultan insuficientes.

Con relación a la Ley de Probidad y Responsabilidad de Funcionarios Públicos, son importantes los siguientes artículos:

*"Artículo 7. Funcionarios públicos. Los funcionarios públicos conforme los denomina el artículo 4 de esta ley, están obligados a desempeñar sus deberes, atribuciones, facultades y funciones con estricto apego a la Constitución Política de la República y, las leyes. En consecuencia, están sujetos a responsabilidades de carácter administrativo, civil y penal por las infracciones, omisiones, acciones, decisiones y resoluciones en que incurrieren en el ejercicio de su cargo".*

*"ARTICULO 17. Casos que generan responsabilidad administrativa. D) La contratación de la esposa o hijos como subalternos en relación de dependencia, o la contratación de personas sin calificación necesaria cuando los cargos requieran calidades, profesión, conocimientos o experiencias especiales, y de personas que se encuentran inhabilitadas conforme a la ley".*

*"ARTICULO 18. Prohibiciones de los funcionarios públicos. Además de las prohibiciones expresas contenidas en la Constitución Política de la República y leyes especiales, a los funcionarios y empleados públicos les queda prohibido:*

- a) Aprovechar el cargo o empleo para conseguir o procurar servicios especiales, nombramientos o beneficios personales, a favor de sus familiares o terceros mediando o no remuneración.*
- b) Utilizar el poder que le confiere el ejercicio del cargo o empleo en las entidades del Estado, autónomas o descentralizadas, para tomar, participar o influir en la toma de decisiones en beneficio personal o de terceros.*
- c) Solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona, dádivas, regalos, pago, honorarios o cualquier otro tipo de emolumentos adicionales a los que normalmente percibe por el desempeño de sus labores.*
- d) Utilizar bienes propiedad del Estado o de la institución en la que labora, tales como vehículos, material de oficina, papelería, viáticos y otros, fuera del uso oficial, para beneficio personal o de terceros.*
- e) Usar el título oficial del cargo o empleo, los distintivos, la influencia, o el prestigio de la institución para asuntos de carácter personal o de terceros.*
- f) Utilizar los recursos públicos para elaborar, distribuir o enviar regalos, recuerdos, tarjetas navideñas o de cualquier otra ocasión.*
- g) Utilizar el tiempo de trabajo para realizar o prestar asesorías, consultorías, estudios y otro tipo de actividades a favor de terceros, que le generen beneficio personal.*
- h) Disponer de los servicios del personal subalterno par afines personales o en beneficio de terceros.*

<sup>6</sup> Disponibilidad y acceso: <https://lahora.gt/iniciativa-de-ley-buscara-evitar-conflicto-de-intereses/>

<sup>7</sup> Disponibilidad y acceso: [https://www.congreso.gob.gt/noticias\\_congreso/3727/2019/3](https://www.congreso.gob.gt/noticias_congreso/3727/2019/3)





- i) Realizar trabajo o actividades remuneradas o no en horarios que no son de su trabajo, que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades, o cuyo ejercicio pueda poner en riesgo la imparcialidad de sus decisiones por razón del cargo o empleo.
- j) Utilizar los materiales de oficina, vehículos, teléfonos, fondos públicos, el tiempo pagado por el Estado al funcionario o a sus subalternos, los conocimientos, información el título oficial, papelería, el prestigio o la influencia de la institución para el logro de objetivos políticos personales o del partido al que pertenece.
- k) Solicitar a otros gobiernos o empresas privadas colaboración especial para beneficio propio o para un tercero.
- l) Actuar como abogado o representante de una persona que ejerce reclamos administrativos o judiciales en contra de la entidad a la cual sirve estando en el ejercicio del cargo o empleo.
- m) Nombrar y remover al personal por motivos o razones político partidistas o ideológicos.
- n) Discriminar en la formulación de políticas y en la prestación de servicios a personas o sectores de personas, por razón de su afiliación política así como por cualquier otra causa que infrinja el derecho de igualdad.
- o) Utilizar recursos humanos y financieros del Estado para la promoción política, personal o del partido político al que pertenece.

Respecto a la Ley de Servicio Civil cabe destacar el artículo 66 que regula "Prohibiciones Especiales. A los servidores públicos les está especialmente prohibido:

1. Solicitar o recibir dádivas, regalos o recompensas de sus subalternos o de los particulares y solicitar, dar o recibir dádivas de sus superiores o de los particulares, con el objeto de ejecutar, abstenerse de ejecutar o ejecutar con mayor esmero o retardo cualquier acto inherente o relacionado con sus funciones.
2. Ejecutar cualesquiera de los actos descritos en el inciso anterior, con el fin de obtener nombramiento, aumento de salario, promoción u otra ventaja análoga.
3. Solicitar o recoger, directa o indirectamente, contribuciones, suscripciones o cotizaciones de otros servidores públicos, salvo las excepciones muy calificadas que establezcan los reglamentos.
4. Ejercer actividades o hacer propaganda de índole política durante y en el lugar de trabajo.
5. Tomar en cuenta la filiación política de los ciudadanos para atender sus gestiones, favoreciéndolos o discriminándolos.
6. Coartar directa o indirectamente la libertad de sufragio.
7. Ninguna persona podrá desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de quienes presten servicios en centros docentes o instituciones asistenciales y siempre que los horarios sean compatibles".

Finalmente, el artículo 20 del Acuerdo 22-2013, Normas de comportamiento ético del Organismo Judicial, indica: "Conflicto de intereses. El personal del Organismo Judicial no debe utilizar su cargo para fomentar el éxito de negocios privados o para su beneficio personal. En tal sentido, le está expresamente prohibido:

- a) Incurrir en agravio, desviación o abuso de autoridad;
- b) Aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dádiva, presente, ofrecimiento o promesa, para realizar un acto relativo a su cargo o abstenerse de un acto que debiera practicar;
- c) Aceptar donación, empleo, cargo o comisión para sí, su cónyuge o parientes legales, que procedan de cualquier persona física o jurídica cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, sujetas a juicio, reguladas o supervisadas por el funcionario o empleado; y
- d) Intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, traslado, ascenso, cese o sanción de cualquier funcionario o empleado, cuando tengan interés personal, familiar o de negocios, o puedan derivar alguna ventaja o beneficio para ellos, su cónyuge o parientes legales".



## Normativa internacional

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción establece en el artículo 8 numeral 5 *"Cada Estado Parte procurará, cuando proceda y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, establecer medidas y sistemas para exigir a los funcionarios públicos que hagan declaraciones a las autoridades competentes en relación, entre otras cosas, con sus actividades externas y con empleos, inversiones, activos y regalos o beneficios importantes que puedan dar lugar a un conflicto de intereses respecto de sus atribuciones como funcionarios públicos"*.

Por su parte, la Convención Interamericana Contra la Corrupción establece en el artículo 3 establece medidas para prevenir la corrupción, entre ellas se encuentra la creación de *"Normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas deberán estar orientadas a prevenir conflicto de intereses y asegurar la preservación y el uso adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus funciones (...)"*.

El Código Internacional de Conducta para los Titulares de Cargos Públicos de las Naciones Unidas estipula *"Los titulares de cargos públicos no utilizarán su autoridad oficial para favorecer indebidamente intereses personales o económicos propios o de sus familias. No intervendrán en ninguna operación, no ocuparán ningún cargo o función ni tendrán ningún interés económico, comercial o semejante que sea incompatible con su cargo, funciones u obligaciones o con el ejercicio de éstas"*.

### • Conclusiones.

Se evidencia el conflicto de interés por parte de la aspirante, porque reúne las calidades, de aspirante y comisionada, dicha circunstancia es indebida desde el plano ético y profesional. Ya que atenta de manera directa al Estado democrático de Derecho al tener esta doble condición por las facultades que reúne en ambos procesos, otorgándole poderes que inciden a sus intereses personales por la influencia que el puesto otorga.

Al elegir a VITALINA ORELLANA Y ORELLANA se estarían violentando los principios sobre la independencia judicial, independencia a la garantía de elegir a candidatos idóneos, capaces y honorables contemplados en el artículo 113 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

Con el objeto de garantizar la imparcialidad del proceso de comisiones de postulación, se hace necesario que en todos los casos que en los que se den estas situaciones sean evidenciados y erradicados. Ya que se puede evidenciar la existencia que, al dejar participar a dicha candidata, existe un conflicto de interés, que es el que se trata de evitar, que sea el interés en particular que afecte la selección de magistrados idóneos en el proceso.

También, la independencia judicial, ya que en tanto existen estos conflictos de interés, surgirían conflictos políticos que estarían condicionando la aplicación de una justicia que fuere pronta y cumplida.



**Solicitud.**

Por lo anterior descrito, se solicita a esa Comisión que la información y los argumentos vertidos, sean tomados en cuenta para considerar como NO IDONEA a VITALINA ORELLANA Y ORELLANA para ser incluida en la nómina de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, candidaturas a ser entregadas al Congreso de la República para el período 2019-2024.

**Medios de prueba que se adjuntan para respaldar el impedimento:**

- Fotocopia simple del listado de comisionados que integran la comisión de postulación para selección de magistrados de las Cortes de apelaciones para el período 2019-2024.
- Fotocopia simple del listado de candidatos a elección de magistrados de la corte suprema de Justicia.
- Comunicado de Prensa CICIG <https://www.cicig.org/comunicados-2014-c/preocupacion-sobre-procesos-de-seleccion-de-candidatos-para-corte-de-apelaciones-y-corte-suprema-de-justicia/>
- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales en Guatemala, año 2015, "Comisiones de postulación, sistematización de los proceso 2014-2015", Guatemala, Guatemala.





LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS DE LA  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - PERIODO 2019-2024

**NOTIFICA**

Que las personas que aparecen a continuación, han sido incluidas en esta nómina; en virtud de reunir los requisitos previstos en la ley y establecidos en la Convocatoria, para continuar el proceso de selección;

No. de EXPEDIENTE	NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE	No. de EXPEDIENTE	NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE	No. de EXPEDIENTE	NOMBRES Y APELLIDOS DEL POSTULANTE
1	Coralia Pazama Pérez Calderón	79	Zonia de la Paz Sanzco Cortés de Bocanegra	157	José Antonio Pineda Barrios
2	Eduardo Eduardo Revolorio	80	Alicia Rosario Ordoñez López	158	José Alfredo Aguilar Orrellana
3	William Gilberto Bonafina López	81	José Alexander Cortés Herrera	159	Cesar Eusebio Milán Requena
4	Zuel Oropert Maas Jacobs	82	Carlos Palacios Benítez Mesa	160	Noé Alexander Ventres León
5	Nicolás Balán Estrada	83	Juan Luis de la Rosa	161	Odilia Yolanda Gómez Herrera de Molina
6	Monica Emilio de León Díaz	84	Eda Nidia Patricia Samartine de Fretillo	162	Frederic Ramón Sánchez Galván
7	Juho Bonifacio Barquez Bulut	85	Zulay Ezequiel Cantoral Campos	163	Clotilde Erika González Jasso
8	Héctor Haroldo Calderón Morales	86	Perla Norette Novell Maldonado	164	Irma Elizabeth Palencia Orrellana
9	Edna Marisol Barco Corado	87	Walter Paulino Jirón Jirón	165	Nidia Lisette Arvelo Flores
10	Alberson Myrta Rivera Fuentes	88	José Felipe Baguila Baguila	166	Clotilde Miriam Miranda Balcar de Hernández
11	Martha Esther Castro Castro	89	Karel Orlene Viquez de Kruier	167	Gilmer Eusebio García Lina
12	Noberto René Alonso del Cid	90	Héctor Hugo Pérez Aguilar	168	Rosamarte de León Cano
13	Maria Eliza Sandoval Ampudia	91	Menes Chavarría López	169	Dora Izzet Navea Flores
14	Alejandro Mariquín Auzo	92	Miguel Ángel Calvez Aguilar	170	Manfredo Alberto López Fuentes
15	Benedicto Contreras Calderón	93	Angelica Yolanda Viquez Gudián	171	Emy Yajana Gramacho Rojas
16	Mariano Eduardo González Méndez	94	Sara Griselda Mac Vee	172	Lilian Magdalena Nolasco Lucas
17	Horacio Enrique Sánchez	95	Religia Annabella Deraz Roman	173	Marlene Joyar Ranshona Catán
18	Felipe Pérez Santos	96	Frederic Malú Hernández Pineda	174	Diego Armando González Medina
19	Flor de María García Villatoro	97	Nidia Judith Castro Lenos	175	Contrato Amalio Reyes Sagastume
20	Jaime Enrique González Dávila	98	Keneth Chavarría Guerra de Mejía	176	Concepción Rafael Ramírez Arreaga
21	Ricardo Gómez Guzmán	99	Ana María Rodríguez Cortés	177	Rosa María José Beth Rivera Acevedo
22	Valeria Gabriela y Orrellana	100	Julio Fernando Echeverría Arquea	178	Rosales Indas Chávez Pérez
23	Nicolás Rivera Bernal	101	Nidia Judith Palacios Colindres	179	Esteban Adolfo Cardeña
24	Anabella Esmaralda Cardona Cimbarrá	102	Juan José Ramírez	180	José Myrta Par Ures
25	William Antonio Rodríguez Marroquín	103	Indulgencia Lidia Cifuentes Maldonado	181	Malva Violeta Domínguez Tavum
26	Santos Octavio Flores Sarmientos	104	María Eugenia Castellanos Cruz	182	Brenda Dary Muñoz Sánchez de Molina
27	Oscar Leonel Solís Cortez	105	Oliverio Ornela Guzmán Sagastume	183	Berta delia Rivera Escalada Barrios de Brío
28	María Isidoro Sandoval Jimenez	106	Juan Antonio Rodríguez Pineda	184	Isabel Wilfredo Flores Díaz
29	Eduardo Galván Casanova	107	Galva Esperanza Valladares Orrellana	185	Carlos Horacio Carrillo García
30	Ronel Emilio Estrada Ariza	108	Héctor Ulises Gómez	186	Ronald Manuel Colindres Roca
31	Miguel Ángel Guzmán Nolasco	109	Juan Rafael Orrellana Galván	187	Hector Osorio Pérez Cast
32	Marta Lidia Nolasco	110	María Antonia Galván Vidal	188	Walter Fabricio Bostales Hernández
33	Luis Alexis Calderón Maldonado	111	Carolina Panagiotou Corcoran	189	Nery Osvaldo Medina Méndez
34	Sergio Antonio Aguilar Murillo	112	Ella Noemí Fátima Alonzo de Galdames	190	Ramón Francisco González Pineda
35	Rita Marina García Aguilar	113	María Rosalva Luna Garza	191	Alba Susana López de Cárdenas
36	Lilberti Romina Carranza Jenguerón	114	Ena Jeanette Viquez Rojas	192	David Gómez Martín
37	Thelma Shawne Orellana Arquea	115	Marta Elena Orellana Morales	193	Herman Roberto Jari Páez
38	Hector Antonio García Moya	116	Frederic Valdesmar Fernández Ortiz	194	Ernesto Galicia Pimentel
39	Aida Marina López Ceballos de San José	117	Cesar Augusto López López	195	Santos Salcedo Gómez
40	Victor Manuel Flores Ceballos	118	Oscar Augusto Cruz Oliva	196	Edgar Estuardo Melchor Solórzano
41	Edgar Ovidio Aguilar Rivera	119	Cruz Montserrat Josa	197	Nery Alfonso Nolasco Nolasco
42	Clayda González Orrellana	120	Carlina Domestico Espino Mérida	198	Ana Marina Pimentel Piedrasanta
43	Henry Alejandro Fitis Wilson	121	Aura Elora Herrera Flores	199	Manfredo Ramón González Ornela
44	Edgar José López Espalillat	122	Luis Antonio Archila Álvarez	200	Manuel Antonio Ramos Solórzano
45	Sandra Anabelita Bárcenas Maldonado de Viquez	123	Fernando Jirón Oropert Nolasco	201	Vicente Ramón Calzadilla Pineda
46	Rosa Herlinda Acevedo Nolasco de Zaldívar	124	Verónica Amparo de León Díaz	202	Carlos Antonio Aguilar Nolasco
47	José Fritzen Torres Coyne	125	Mirna Elizabeth Ceballos Salazar de Calvez	203	Nidia Anabelina Alvarado de León
48	Edgar Alfredo Campos Salazar	126	Carlos Enrique Ceballos Mac	204	José Aparicio Alvarado Velásquez
49	Zonia Haydée Toledo Cruz	127	Zola Gabriela López de la Rosa	205	Joacimán Mariana Berroa
50	Rafael Morales Solares	128	Rolando Roberto Juregui	206	Guillermo Lombardo Torres Carillo
51	Akara Ricardo Corón Paredes	129	Rogelia del Carmen Viquez Carillo	207	Frederic León Romero Morales
52	Alfreda Salazar Flores	130	Walter Oliver Viquez Díaz	208	Jenny Nolasco Alvarado Tami
53	Walter Brenner Viquez Gómez	131	Giovanni Francisco Soto Santos	209	Salva Tojin Nolasco
54	Edgar Orlando Ruano Gudián	132	Luis Eduardo López Ramos	210	Arin Beatriz Santos Grón
55	Wilber Estuardo Castellanos Ventres	133	Marta Susana Vides Lavareda	211	Virginia Ester García Méndez
56	Carlos Ronald Paiz Xulá	134	Manuel Benjamín Duarte Barrios	212	Cathy Rosalva López Rodríguez
57	Aida Marina Mardela Solares de Rodríguez	135	Hector Federico Merillizabal Arevalo	213	Leonel Rodolfo Sánchez Rodríguez
58	Carlos Humberto Rivera Carillo	136	Francisco Rolando Durán Méndez	214	Ricardo Isaiel Casti Casti
59	Aida Estrella Ruano de León de la Cruz	137	José Luis de Arce Salazar Palacios	215	Tricks Carolina Granados Acevedo
60	Otto Cecilio Mayén Morales	138	Alberto Benito Utrero	216	Marco Antonio de León Olivas
61	Walter Ricardo Echeverría Méndez	139	Frederic Estuardo López Rodríguez	217	Teresa Isabel Flores Estrada
62	Angel Esteban Fátima de León	140	Custodio Adolfo Morales Duarte	218	Luis Felipe Lepe Monterroso
63	Clayda Elizabeth Montemayor Viquez de Alvarado	141	Sergio Armando Tami Aguayo	219	Cecilia Oriana Macrostro Arizaga de Salazar
64	Dina Montecarlo Rodas	142	Rogelia Cárdenas	220	Isabel Liviana Soto Gudián
65	Cristina Elizabeth Echeverría Ramírez de Méndez	143	Francis Ornela Barrantes Parilla	221	Oscar René Benito Díaz
66	Rene Guillermo Gudián Palacios	144	Clayda Yolanda Alberto Oropert	222	Maria Cecilia de León Torres
67	Luis Mauricio Corado Campos	145	Alvaro Fene Guerra López	223	Julia Marina Maldonado Echeverría
68	Guillermo Adolfo Dubón Galván	146	Carlos Alberto Gudián Roldán	224	Frederic Noel Pérez Corón
69	Lesbia Elizabeth Guzmán Valle	147	Pedro Edmundo Sum	225	Blanca Ester Velásquez Sagastume
70	Alex Antonio Morales Álvarez	148	Wilfredo Pérez Escobar	226	Mirza Eugenia Lunaquay López
71	Carlos Guillermo Guerra Jordán	149	Ella Nolasco Castillo Pineda	227	Myrta Mauricio Moto Moratana
72	Carlos Enrique Cárdenas Chacón	150	Ella Lorena Arán Díaz	228	Emma Patricia Guzmán de León de Chen
73	Wina Nolasco Reyes González	151	Armando Orlene Reyes Aldana	229	Ariel Benítez Méndez
74	Flor de María Gómez Barrios	152	Jorge Rolando Sequén Montero	230	Rolando López Morán
75	Clayda Lucinda Paredes Castañeda	153	Gloria Lidia Suchito Barrios	231	Christian Alejandro Linares Ponce
76	Juan Carlos Gómez Rodríguez	154	Francisco Armando Martínez Iluc	232	Elena Marilín Lunaquay López
77	Diana Isadora Gudián Flores	155	Sonia Toledo Castañeda	233	Victor José Montemayor Hernández

La presente publicación se realiza para los efectos legales de la Ley de Comisiones de Postulación, para que cualquier persona que conozca impedimentos, lo haga saber a la Secretaría ubicada en la 40 Calle 10-02 zona 8 Campus Central de la Universidad Mesoamericana, durante los días 1, 2, 3 y 4 de febrero del 2020 de 8:00 a 17:00 horas. Quien se dirija a la Comisión deberá realizarlo de forma escrita y en versión digital, identificándose con nombre y apellido; demás generales y Documento Personal de Identificación.

Si compareciera en representación de Persona Jurídica, deberá acreditar su calidad ante la Comisión.

**Dr. Félix Javier Serrano Uruja**  
Presidente de la Comisión

Ciudad de Guatemala, 31 de enero de 2020

**Lic. Mario Raúl García Morales**  
Secretario de la Comisión







## COMISIÓN DE POSTULACIÓN

para Magistrados de Sala y Otros Tribunales de la misma categoría

[Inicio](#) [Leyes y Reglamentos](#) [Documentos Descargables](#) [Comisionados](#) [Transmisión en Línea](#) [Candidatos](#)  
[Contáctenos](#)

### Comisionados

MSc. Ing. Murphy Olympo Paiz Recinos  
 Magistrada Silvia Patricia Véldez Quezada  
 Magistrado Nery Osvaldo Medina Méndez  
 Magistrada Vitalina Orellana y Orellana  
 Magistrada Dolia Marina Dávila Salazar  
 Magistrado Josué Felipe Baquix Baquix  
 Magistrado Sergio Amadeo Pineda Castañeda  
 Magistrada Silvia Verónica García Molina  
 Magistrado Nester Mauricio Vázquez Pimentel  
 Magistrado Raulito Rafael Rojas Cetina  
 Magistrado José Antonio Pineda Barales  
 Magistrada María Eugenia Morales Aceña  
 Magistrado Manuel Reginaldo Duarte Barrera  
 Lic. Dimas Gustavo Bonilla  
 Lic. Jorge Guillermo Arauz Aguilar  
 Dr. Milton Estuardo Argueta Pinto  
 Lic. Mario Raúl García Morales  
 Lic. Enrique Sánchez Usera  
 Dra. Jary Leticia Méndez Madaleno  
 Lic. Luis Fernando Cabrera Juárez  
 Lic. Luis Antonio Ruano Castillo  
 Lic. Luis Roberto Aragón Solé  
 Licda. Ana Mercedes Suasnávar Palma  
 Lic. Juan Carlos Rodil Quintana  
 Lic. David Ricardo González Tablada  
 Licda. Lidia Judith Urizar Castellanos  
 Licda. Norma Beatriz Santos Quezada  
 Lic. Hugo Enrique Cabrera Navas  
 Lic. Carlos Alfredo Jaruegui Muñoz  
 Licda. Jennifer Candelaria Dell'acqua Lima  
 Lic. Luis Fernando Ruiz Ramírez  
 Carlos Anibal Hernández Martínez  
 Licda. Gladys Verónica Ponce Mejicanos  
 Licda. Gloria Elizabeth Ortiz Mérid  
 Licda. Olga del Rosario Alfaro Pineda  
 Lic. Henry Giovanni Dubón Ruann  
 Lic. Juan Salvador Soto Hernández



Archivo histórico de la CICIG hasta el 3 de septiembre 2019.



Search ...



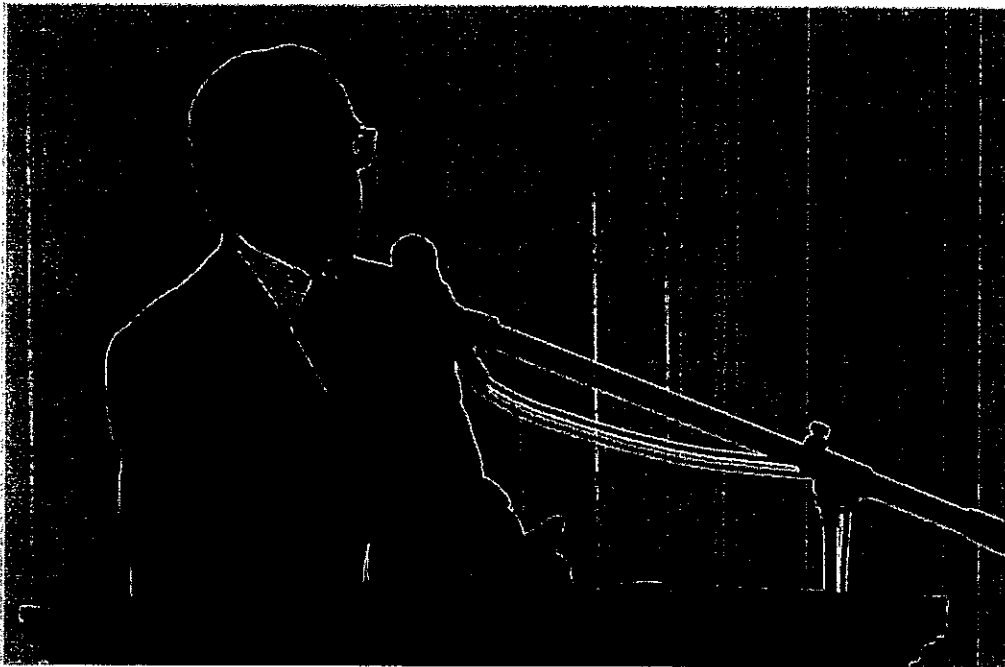
**CICIG** Comisión  
Internacional contra  
la Impunidad en Guatemala



≡ MENU

▶ Historial CICIG |

PREOCUPACIÓN SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA CORTE  
DE APELACIONES Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



## PREOCUPACIÓN SOBRE PROCESOS DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS PARA CORTE DE APELACIONES Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

septiembre 16, 2014 ▶ Editor O □

📄 COMUNICADO DE PRENSA 032

El día de hoy, en conferencia de prensa, el Comisionado Iván Velásquez Gómez manifestó la preocupación acerca del desarrollo de los procesos de selección



de candidatos para Cortes de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia que se adelantan actualmente en las Comisiones de Postulación: "Lo hacemos con el mayor respeto por la institucionalidad del país, con el único propósito de contribuir a la construcción de un sistema de justicia independiente, imparcial, idóneo, apto para enfrentar el incremento siempre ascendente del crimen organizado".

El Comisionado hizo un llamado para que un verdadero proceso de selección llegue a la esencia vital de los candidatos a ejercer una de las funciones más sublimes: la potestad de juzgar a sus semejantes con fuerza de autoridad, de disponer de vidas y bienes. Para lo cual se debe asegurar que los escogidos sean los ciudadanos más capaces, más idóneos y honorables de quienes aspiran a cumplir tan elevada misión.

Un proceso de selección para quienes ocuparán los más altos cargos de la administración de justicia debe garantizar que los aspirantes acrediten sus verdaderas calidades; que si se trata de jueces que quieren ascender en el organismo judicial -aún permanecer en sus magistraturas- puedan demostrar ante los postuladores su experiencia, su sabiduría para resolver conflictos, sus conocimientos, sus habilidades para el manejo de situaciones críticas, su criterio. Que pueda decir frente a sus evaluadores, prueba en mano: este soy yo y por esto no sólo aspiro sino que merezco ser magistrado de la República de Guatemala. Que presente su declaración patrimonial y que esta pueda verificarse, Y que la sociedad ejerza su veeduría para confirmar que efectivamente quien pretende ser su juez es digno de que la juzgue.

El Comisionado Velásquez exhortó -con la mayor buena voluntad- a las autoridades nacionales y a la sociedad en su conjunto para que inicie un serio proceso de reflexión sobre el sistema de justicia vigente en el país y, con un "criterio patriótico altruista, más allá de los mezquinos intereses personales o sectoriales" se emprenda una profunda reforma que modernice el aparato de justicia y haga realidad el mandato contenido en el inciso 2º del artículo 203 de la Carta Política: "Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público".

### **Lectura de interés: Denuncias entregadas al Ministerio Público**

#### **Cuestionamientos**

Considera que el proceso de escogencia de los altos funcionarios judiciales debería ser un acto sublime de la democracia en el que un grupo de selectos ciudadanos -académicos de las facultades de derecho, administradores de justicia y representantes de los abogados- se aplicaran con responsabilidad,



pero también con devoción y entusiasmo, a examinar integralmente a los mejores ciudadanos que habrían de ocupar esas dignidades.

Por esta razón hace unos meses la CICIG propuso una "Guía de buenas prácticas éticas y procedimentales para Comisiones de Postulación", en la que señalaba cuatro elementales premisas: Acreditación de méritos de vida personal y profesional; revisar, escrutar y escudriñar con una entrevista que confronte al candidato con su realidad; garantizar la transparencia de los procesos mediante la adopción previa de reglas claras y uniformes y que como lo ha exigido la Corte de Constitucionalidad y lo enseñan las modernas teorías del Estado Democrático de Derecho, los comisionados expresen de viva voz las razones de su voto.

En su exposición el Comisionado mencionó la decisión de la Corte de Constitucionalidad del 13 de junio del 2014, expediente 2143-2014: "Se reitera que los comisionados deberán efectuar una evaluación objetiva y razonable, apegada a las constancias que se presenten por los participantes, lo investigado por ellos, las entrevistas realizadas y considerado adecuadamente los aspectos que se reseñan, y tomar en cuenta que el solo hecho de participar implica que el postulante ha satisfecho los requisitos para haber obtenido un grado universitario, y sin que esa evaluación sustituya la obligación que tiene cada uno de los integrantes de la Comisión de Postulación de justificar de manera pública, razonada y expresa en el momento de la votación, por qué se elige o por qué no se elige a un candidato determinado ...".

### **Lectura de interés: Foro sobre justicia en Mazatenango**

En lugar de ello, mencionó, ha habido cambios del cronograma durante el proceso, acceso vetado al público; poca fluidez en el acceso ciudadano a la información, inadecuados perfiles de los aspirantes, tablas de gradación deficientes, registro incompleto de las votaciones, entre otros aspectos.

Algo que preocupa es que si bien, no existe norma legal que prohíba postular a su postulador, no parece ético ni respetuoso de un Estado Democrático de Derecho que un comisionado reúna en sí mismo la doble condición de elector y de candidato. No se trata de una violación del derecho a optar a empleos o cargos públicos que el mismo artículo 113 constitucional consagra. Simplemente, el abogado o magistrado de apelaciones que íntimamente conocía su aspiración, debió abstenerse de participar en el proceso de representación de su gremio y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia que pretendía su reelección, debió excusarse ante el pleno poniendo de presente sus pretensiones laborales.

Otro aspecto que resaltó: A la fecha, absolutamente todas las etapas esenciales del trámite se encuentran cuestionadas ante la Corte de





Constitucionalidad: la integración de las Comisiones tanto por razones de parentesco como de membresía a los gremios que escogen representantes; el perfil diseñado por las comisiones; la carencia de exigencia de acreditación de requisitos; las tablas de gradación; el conflicto de intereses de los comisionados-candidatos; la no realización de entrevistas y la amenaza de incumplimiento de la orden impartida por la Corte de Constitucionalidad para que se vote razonadamente y de viva voz por los candidatos.

### **Propuestas**

Dos elementos de reflexión adicionales que podrían conducir a una conclusión: el agotamiento del modelo de comisiones de postulación.

De un lado, si la composición de estas comisiones está dada por la cantidad de facultades de derecho existentes en el país, es segura que en los próximos 5 años estas rebasarán el número de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y será absolutamente caótico su funcionamiento. Desde el pasado proceso del 2009 hasta hoy, se han creado 3 nuevas facultades de derecho, alguna de ellas carece inclusive de estudiantes, y en todo caso no tienen a la fecha ninguna promoción de graduados y mucho menos algún alumno colegiado; y, sin embargo, por el solo hecho de su creación ya participan en la escogencia de magistrados de salas de apelaciones y de Corte Suprema de Justicia.

### **Lectura de interés: Postuladoras deben garantizar selección de candidatos idóneos**

De otro lado, parece un hecho que el proceso ha sido cooptado por intereses externos, ajenos a los postulados de una justicia independiente, imparcial, justa y cumplida.

La CICIG, en ejercicio del mandato que le otorga el Acuerdo entre la Organización de las Naciones Unidas y el Gobierno de Guatemala suscrito el 12 de diciembre del 2006, particularmente en cuanto al fortalecimiento del Estado de Derecho, exhorta al Estado y a la sociedad de Guatemala a que emprendan con carácter de urgencia una reforma profunda en su sistema de justicia que permita -por lo menos- se robustezca y amplíe la carrera judicial y se implemente un órgano permanente que pueda garantizar que el ingreso a la misma se realice de manera objetiva, autónoma, fundado únicamente en los méritos de los candidatos y libre de toda injerencia política. Esta sería una solución a mediano plazo.

Pero al corto plazo esta es la propuesta:

01. Solicitar a los candidatos que acrediten documentalmente sus méritos de capacidad e idoneidad como abogado, magistrado o juez, y que acrediten su estado patrimonial vigente.



02. Desarrollar un proceso de evaluación de cada candidato según la documentación aportada a través de una metodología que contenga criterios verificables; que además permitan un ejercicio del principio de publicidad y de auditoría social.
03. Entrevista activa que permita cotejar y validar lo documentado por el candidato respecto de sí mismo y profundizar en sus fortalezas para el cargo.
04. Como requisito fundamental para el debido cumplimiento de una instrucción directa de la Corte de Constitucionalidad contenida en una resolución de fecha 13 de junio 2014, se debe emitir voto fundamentado, justificado y publico.

Si bien el proceso podría demorarse, existe fundamento legal para alargarlo más allá del 13 de octubre.

#### GALERÍA DE FOTOS:



 print

**SHARE:**     

**TAGS:** Comisiones de postulación

### Artículo anterior

Medios reportan la desarticulación de red criminal

### Artículo más reciente

NORUEGA FORTALECE LA JUSTICIA GUATEMALTECA



**Datos de las personas o entidades que presentan el impedimento:**

<b>1. Nombre:</b>	Carlos Rolando Yax Medrano
<b>Documento Personal de Identificación:</b>	2995 52969 0101
<b>Profesión:</b>	Estudiante
<b>Estado Civil:</b>	Soltero
<b>Domicilio:</b>	Guatemala, Guatemala
<b>Dirección para ser notificado:</b>	13 calle 2-14 zona 1, ciudad de Guatemala
<b>Teléfono:</b>	2463-2323
<b>Correo electrónico:</b>	contacto@alianzareformas.org

**Firma de la persona que presenta el impedimento:**









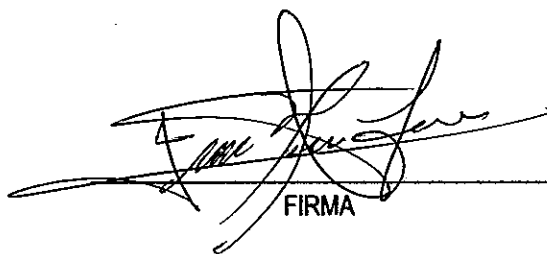


# COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA SELECCIÓN DE MAGISTRADOS A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

2019-2024

## FICHA DE PRESENTACIÓN DE IMPEDIMENTOS DE PERSONAS INDIVIDUALES O JURÍDICAS

Fecha: 04/02/2020 Número de Expediente: 22  
Nombres y Apellidos del Postulante: Vitalina Orellana y Orellana  
Denunciante: Jose Orlando Velasquez F. DPI: 178113921001  
Institución: -  
Representante Legal: -  
Dirección Física: 5 avenida, 10-68 oficina 511  
Quinto nivel, Edificio Helvetia.  
Dirección Electrónica: movimientosicj@gmail.com  
Teléfono (s): 22305282

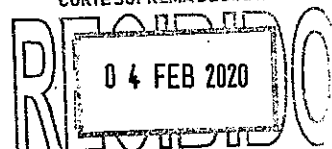
  
FIRMA

### NOTA IMPORTANTE:

Adjuntar copia legible del DPI con fotografía clara.

Fotocopia legalizada de nombramiento de Representante Legal.

COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA EL  
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



RECIBE: Lidia HORA: 16:11

8

1821-3



2

**EXPEDIENTE No. 22 (VITALINA ORELLANA Y ORELLANA)**

**SEÑORAS Y SEÑORES, MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE POSTULACIÓN PARA MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL PERÍODO DOS MIL DIECINUEVE GUIÓN DOS MIL VEINTICUATRO.**

JOSE ORLANDO VELÁSQUEZ FUENTES, de cuarenta y dos años de edad, casado, guatemalteco, dirigente sindical, de este domicilio y vecindad, identificado con el Documento Personal de Identificación, Código Único de Identificación un mil setecientos ochenta y uno espacio trece mil novecientos veintiuno espacio cero ciento uno (1781 13921 0101) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; y MARCO VINICIO MENDEZ LÓPEZ, de cuarenta y ocho años de edad, soltero, guatemalteco, dirigente sindical, de este domicilio y vecino del Municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, identificado con el Documento Personal de Identificación, Código único de Identificación un mil setecientos setenta y uno espacio cuarenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho espacio cero ciento ocho (1771 48268 0108) extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala; quienes señalamos como lugar de residencia y para recibir notificaciones para los efectos de esta comunicación la sede de nuestra Central Sindical, MOVIMIENTO SINDICAL INDÍGENA Y CAMPESINO GUATEMALTECO –MSICG- ubicada en la quinta (5ª) avenida, diez guión sesenta y ocho (10-68), Oficina quinientos once (511) Quinto Nivel del Edificio Helvetia, zona uno (1) del Municipio de Guatemala, Departamento de Guatemala, así también el número de teléfono 22305282 y el correo electrónico [movimientosicg@gmail.com](mailto:movimientosicg@gmail.com), y por este medio comparecemos ante ustedes con el objeto de poner en conocimiento de esa COMISIÓN IMPEDIMENTO POR FALTA DE HONORABILIDAD PARA SER INCLUIDA EN LA NÓMINA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA PERSONA DE VITALINA ORELLANA Y ORELLANA y para el efecto:

**I. EXPONEMOS**

1. El Artículo 113 de la Constitución Política establece que los guatemaltecos tienen derecho a optar a empleos o cargos públicos y para su otorgamiento no se atenderá más que a razones fundadas en méritos de capacidad, idoneidad y honradez.
2. El Artículo 207 de la Constitución establece que los magistrados y jueces deben ser guatemaltecos de origen, de reconocida honorabilidad, estar en el goce de sus derechos ciudadanos y ser abogados colegiados, salvo las excepciones que la ley establece con respecto a este último requisito en relación a determinados jueces de jurisdicción privativa y jueces menores.
3. El Artículo 13 del Decreto del Congreso de la República 19-2009 Ley de Comisiones de Postulación preceptúa que en congruencia con la Constitución Política de la República, leyes constitucionales, leyes ordinarias aplicables y lo dispuesto en el mismo Decreto, las Comisiones verificarán el cumplimiento de los requisitos establecidos que deberán satisfacer los participantes. La falta de cumplimiento de requisitos será causal suficiente para excluir a cualquier participante de la nómina respectiva.
4. La Corte de Constitucionalidad al referirse al requisito reconocida honorabilidad ha considerado que "...B) Conforme lo indicado en el párrafo anterior, tenemos que la "honorabilidad" es un concepto eminentemente filosófico que proviene del vocablo "honor", predominantemente arraigada en la denominada doctrina moral, la que trata de definirla como la cualidad que tienen los actos de los seres humanos, con relación al bien o lo bueno. En este sentido, podemos tener una perspectiva de que la finalidad de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente, al establecer dicho aspecto en la Constitución Política de la República de Guatemala, como un requisito indispensable que debían llenar los ciudadanos que aspiraran ocupar los cargos públicos de alta jerarquía de ciertos órganos establecidos en la misma Constitución, es con el objeto de que los aspirantes a tal dignidad fueran personas que, de acuerdo a su comportamiento personal y profesional, tuvieran una conducta (manifestada en la voluntad de sus actos) que

buscaran y procuraran la correcta interpretación de las normas o leyes sociales y jurídicas y, con ello, evidenciaran su inclinación a la debida aplicación a lo justo o la justicia (o lo que es bueno), lo que podría darles un determinado estado de honor u honorable; y por el contrario, excluir a aquellas personas que atraídos por una falsa apariencia de justicia (o de lo bueno), su actuación tratara de tergiversar o alterar las cosas para obtener un resultado contrario o prohibido por las leyes o las normas sociales y jurídicas. En el campo del derecho, el honor (de donde proviene la honorabilidad) tiene su relevancia por cuanto es tomado por ciertas ramas de las ciencias jurídicas, como por ejemplo en la civil y penal, en donde el honor o la honorabilidad son tutelados en un alto grado que, su vulneración o violación, puede ser impedimento para ejercer determinados actos o bien ser sancionado con una pena. C) Ahora bien, cuando se habla de que la honorabilidad debe ser “reconocida”, se está haciendo alusión a que las cualidades (a que se hacen referencia) de una persona, son de conocimiento de toda la sociedad o bien, de un segmento de la misma, que la muestra a aquella por lo que es en cuanto a sus méritos, talentos, destrezas, habilidades, criterio y cualidades humanas, que buscarán y procuraran la correcta aplicación de las normas o las leyes y, con ello, la justicia, y que esa actuación de la persona en el ejercicio del cargo público que pudiera ocupar, cumpla con garantizar a los habitantes de la nación, la protección a la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona (...). IV. Conforme lo relacionado, la “reconocida honorabilidad” es un aspecto abstracto que sólo se puede comprender de una manera intelectual y que, ni en la práctica ni en las normas constitucionales indicadas, está definida la forma de comprobarla, ni mucho menos asignarle un valor. Al respecto, este Tribunal, en cuanto a la comprobación de la “reconocida honorabilidad”, dentro del expediente tres mil quinientos treinta y seis - dos mil nueve (3536-2009) referido, indicó lo siguiente: “...En el Expediente 3690-2009 (auto de cuatro de octubre de dos mil nueve) esta Corte precisó una serie de aspectos que nutrirán este fallo, lo que permite no sólo la reiteración de algunos criterios ya sostenidos con anterioridad (Cf. Expedientes acumulados 1903-2003, 2183-2003 y 2261-2003; Expedientes 273-91, 205-94 y 300-99) sino también la elaboración de un corpus doctrinal que oriente el actuar del poder público, cuando se le exija -para la elección, nominación, selección u otro procedimiento similar- valorar sobre el aspecto „reconocida honorabilidad“... sobre la cual esta Corte se ha pronunciado con anterioridad... en cuanto a considerarse éste un requerimiento comprobable mediante una serie de elementos.>> Para efectos de este fallo, la comprobación de la honorabilidad aludida en el auto citado, se lista en literales, así: **A) Acreditaciones: la presentación de documentos o certificaciones**“. B) Criterios sociales: „la buena conducta profesional, la estima gremial, el Expediente 942-2010 9 reconocimiento del foro público, el decoro profesional, entre otros, siempre con el debido respeto al principio de presunción de inocencia“. C) Repercusiones en el actuar: „tanto en lo profesional (si es que el candidato proviene del sector del ejercicio liberal), como en la judicatura u otro servicio prestado desde la administración pública o en cualquier otro ramo, entendiéndose como tal no solo su ejercicio profesional, sino también las actividades personales, comerciales o de cualquier otra índole que resultaren incompatibles con el ejercicio de la función pública; en el caso de mérito con la judicatura“. D) Respeto a la intimidad: „De no ser así, se correría el peligro de entrar a aspectos de la intimidad personal o a la esfera del derecho a la propia imagen (derivado del contenido de los artículos 4 y 5 constitucionales), fuera de todo aquello que nutre la reconocida honorabilidad y lleve a juicios de valor ajenos, que se alejen de la previsión constitucional en lo que a este aspecto atañe“. E) Criterios de organismos internacionales: <>. F) Legislación ordinaria: <>. G) Criterios complementarios: la exégesis anterior, sienta criterios para lo que en diversos ámbitos se denomina „Guía de buenas prácticas“ a favor de la transparencia y con ello, ante futuros procesos de elección de diversos funcionarios públicos (no sólo por parte del Congreso de la República, sino también por Poderes del Estado o entidades gubernamentales), se cuente con criterios que orienten su actuar en el futuro, tal y como estimó esta Corte en el Expediente 2409- 2009, Sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil nueve, al considerar: „debido a las especiales circunstancias que lo generaron y eventualmente podrían nuevamente acaecer, esta sentencia debe clarificar el

cómo del actuar público". También deberá tomarse en cuenta lo resuelto en la Opinión Consultiva 3755-2009, de siete de octubre de dos mil nueve, en cuanto a las preguntas formuladas por el Congreso de la República a esta Expediente 942-2010 10 Corte, sobre la substitución de aquellos candidatos ya electos, con base en „pruebas fehacientes" y „qué denuncias son fundamentadas (...) sin que ello signifique violar el principio de inocencia, el derecho de defensa y el precepto constitucional que establece que la potestad de juzgar corresponde a los tribunales de justicia, que ninguna otra autoridad puede intervenir en la administración de justicia y que ello no atenta contra la independencia del Organismo Judicial"... En los casos de elecciones que en la Constitución Política de la República o en las leyes complementarias de jerarquía constitucional no se encuentren expresamente reguladas, la legislación ordinaria puede establecer precedentes que la legislación autorice, siempre dentro del marco de valores que el sistema constitucional proclame como sustanciales... en particular, porque los requisitos profesionales y éticos que la Constitución establece para optar a tal dignidad constituyen características individuales... siendo ideal que la designación se haga bajo la estricta responsabilidad moral de los electores, habida cuenta que condiciones esenciales de la vida humana, como la libertad, la igualdad, la propiedad e incluso la vida misma, pueden estar sometidos a la prudencia, enjundia, carácter y probidad de la administración de justicia. Es atendiendo a esta razón que, precisamente, estos requisitos profesionales y éticos con los que debe cumplir cada aspirante, deben ser calificados con especial rigorismo, en atención a que una persona es honorable o no lo es y por ende lógicamente no existen categorías en cuanto a honorabilidad se refiere: -menos honorable, más honorable, o medio honorable..." [Sentencia de fecha 24 de agosto de 2010 dictada dentro del Expediente 942-2010]. Las negrillas son propias.

## II. DEL IMPEDIMENTO POR FALTA DE HONORABILIDAD PARA SER INCLUIDA EN LA NÓMINA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA A LA PERSONA DE VITALINA ORELLANA Y ORELLANA

1. El motivo de impedimento para que la persona de **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** pueda ser incluida en la nómina de candidatos para ocupar el cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia radica en los nombramientos de las personas identificadas como NIDIA VIOLETA DOMÍNGUEZ TZUNUM y AURA NELLY GARCÍA DE LEÓN realizados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia integrado también en ese momento por la citada aspirante.
2. Este nombramiento se hizo sin que la ley contemple el cargo de Magistrado de Apoyo en las Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y sin que dichas personas hayan sido nombradas como magistrados titulares por el Congreso de la República de Guatemala que era el ente facultado, en caso de existir tal cargo, para nombrar a quien debía ejercerlo como titular.
3. En consecuencia, los nombramientos realizados por el pleno de la Corte Suprema de Justicia integrado también por la persona de **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** se hicieron en violación de la Constitución y disposiciones legales vigentes y con el objeto de un resultado contrario y prohibido por todo el ordenamiento jurídico guatemalteco lo cual denota su falta de honorabilidad para ser incluida en la Nómina para ocupar el cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia para el período 2019-2024.
4. La Constitución Política de la República de Guatemala establece en su artículo 103 que los tribunales que administrarán justicia en materia laboral están determinados por la ley y los artículos 284 y 301 del Código de Trabajo determinan cuáles son estos tribunales, estableciendo entre ellos las Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social las cuales se conforman con TRES MAGISTRADOS, SIENDO ESTOS UN PRESIDENTE Y DOS VOCALES, *sin que en dicha configuración se establezca que Salas de Trabajo puedan constituirse con CUATRO MAGISTRADOS, es decir, con un MAGISTRADO DE APOYO.*

5. El artículo 103 de la Constitución Política de la Republica establece: "...Todos los conflictos relativos al trabajo están sometidos a jurisdicción privativa. La ley establecerá las normas correspondientes a esa jurisdicción y los órganos encargados de ponerlas en práctica."
6. El artículo 283 del Código de Trabajo establece que: "Los conflictos relativos a Trabajo y Previsión Social están sometidos a la jurisdicción privativa de los Tribunales de Trabajo y Previsión Social, a quienes compete juzgar y ejecutar lo juzgado."
7. El artículo 284 del Código de Trabajo regula: "Los Tribunales de Trabajo y Previsión Social son: a) Los juzgados de Trabajo y Previsión Social, que para los efectos de este Código se llaman simplemente "juzgados"; b) Los Tribunales de Conciliación y Arbitraje; y c) Las Salas de apelaciones de Trabajo y Previsión Social, que para los efectos de este Código, se llaman simplemente "salas".
8. El artículo 300 del mismo cuerpo legal determina que: "La Corte Suprema de Justicia, conforme las necesidades lo demanden, determinará el número y jurisdicción territorial de las salas de apelaciones que conocerán en segunda instancia de los asuntos de Trabajo y Previsión Social."
9. El artículo 301 del Código de Trabajo establece que: "Dichas salas están integradas por tres magistrados propietarios y tres suplentes electos por el Congreso de la República, debiendo presidir el Tribunal, el electo en primer término y correspondiendo la calidad de vocales primero y segundo a los otros dos en el orden de su elección. Tendrán un secretario que debe ser abogado de los tribunales de la República o estudiante de Derecho y los escribientes y notificadores que fueren necesarios."
10. Puede apreciarse que la Constitución Política de la República y el Código de Trabajo, facultan a la Corte Suprema de Justicia para crear órganos jurisdiccionales para impartir justicia laboral, no obstante, lo relativo al tipo de órgano, su denominación y su conformación son aspectos reservados para la legislación ordinaria, misma que no está facultada para emitir o reformar la Corte Suprema de Justicia por ser esta función asignada exclusivamente al Congreso de la República de conformidad con el artículo 157 de la Constitución Política de la República.
11. En ese sentido, aunque la Corte Suprema de Justicia puede crear tribunales y entre ellos Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, solamente puede crear los tribunales que se enumeran en el artículo 284 del Código de Trabajo y estructurarlos conforme lo que prevé, en el caso de las Salas de Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, expresamente el artículo 301 del Código de Trabajo que determina que dichas Salas estarán conformadas por 3 magistrados (un presidente y dos vocales).
12. Por su parte, el artículo 217 de la Constitución Política de la República de Guatemala determina que: "Para ser magistrado de la Corte de Apelaciones, de los tribunales colegiados y de otros que se crearen con la misma categoría, se requiere, además de los requisitos señalados en el artículo 207, ser mayor de treinta y cinco años, haber sido juez de primera instancia o haber ejercido por más de cinco años la profesión de abogado. Los magistrados titulares a que se refiere este artículo serán electos por el Congreso de la República, de una nómina que contenga el doble del número a elegir, propuesta por una comisión de postulación integrada por un representante de los Rectores de las Universidades del país, quien la preside, los Decanos de las Facultades de Derecho o Ciencias Jurídicas y Sociales de cada Universidad del país, un número equivalente de miembros electos por la Asamblea General del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y por igual número de representantes electos por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión. En las votaciones, tanto para integrar la Comisión de Postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación."
13. Este extremo es ratificado por el artículo 301 del Código de Trabajo en virtud del cual, la investidura de Magistrado de la Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, solamente puede ejercerse en virtud de *nombramiento, emitido directamente por el Congreso de la República de Guatemala*.



14. No obstante las prescripciones legales citadas que se encuentra vigentes la persona de **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** integrando el Pleno de la Corte Suprema de Justicia con fecha 23 de noviembre de 2016, en el punto DÉCIMO SÉPTIMO del Acta 72-2016, Numeral Romano V acordó junto a otros Magistrados del mismo tribunal designar con efectos a partir del 1 de febrero de 2017 al 12 de octubre de 2019 a la Abogada NIDIA VIOLETA DOMÍNGUEZ TZUNUM como Magistrada de Apoyo para la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y en el numeral romano VI designar del 1 de febrero de 2017 al 12 de octubre de 2019 a la Abogada AURA NELLY GARCÍA DE LEÓN como Magistrada de Apoyo para la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.
15. Dicho nombramiento se hace, según lo indica el Punto Décimo Séptimo del Acta Número 72-2016 de fecha 23 de noviembre de 2016, con fundamento en el artículo 27 del Acuerdo Número 31-2000 de la Corte Suprema de Justicia, Reglamento General de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial que establece: “Las personas nombradas deben tomar posesión el día uno o dieciséis de cada mes, o en su defecto, el primer día hábil siguiente, salvo que la naturaleza del cargo o las condiciones del servicio requieran la toma de posesión inmediata, en cuyo caso la autoridad que de posesión del cargo deberá hacer constar esta circunstancia en el acta. En ningún caso la toma de posesión de un puesto tendrá efecto retroactivo. En toda acta de toma de posesión, se hará constar el juramento de fidelidad a la Constitución Política de la República y de cumplimiento de las leyes del país prestada por el recipiendario del cargo.”.
16. Dicha norma, además de ser jerárquicamente inferior al Código de Trabajo y a la Constitución Política de la República de Guatemala, tampoco faculta a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para “designar” de manera temporal o permanente, magistrados titulares de las Salas de la Corte de Apelaciones.
17. En consecuencia la falta de honorabilidad de **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** deviene de la realización de un nombramiento en violación de lo expresamente previsto en la Constitución y Leyes vigentes y en exceso de las atribuciones que la ley le asigna al órgano del cual la tachada forma parte tal como se deja constancia en el texto del Décimo Séptimo punto del Acta Número 72-2016 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de fecha 23 de noviembre de 2016 citado.
18. Adicionalmente a lo expuesto de conformidad con el artículo 217 de la Constitución Política de la República y 301 del Código de Trabajo, para ejercer el cargo como Magistrado Titular de una Sala de la Corte de Apelaciones, se requiere que la persona que haya de ocupar el cargo sea directamente electa y nombrada como Magistrado titular por el Congreso de la República, condición que no concurre en las personas de NIDIA VIOLETA DOMÍNGUEZ TZUNUM y AURA NELLY GARCÍA DE LEÓN. De la misma manera, el nombramiento como Magistrado Titular de la Sala de Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social no puede realizarse temporalmente, ya que quienes son electos directamente por el Congreso de la República de Guatemala para ocupar un cargo como Magistrado Titular de una Sala de la Corte de Apelaciones no lo son para ocupar dicho cargo por un período distinto al período constitucional de cinco años.
19. En ese sentido, en el nombramiento realizado por la Magistrada **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** concurren tres aspectos que lo hacen ilegal; el primero, que el cargo de MAGISTRADO DE APOYO, no existe como parte de la integración de las Salas de Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social; el segundo, porque el nombramiento como Magistrado titular de una Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social es un acto que solamente puede realizar el Pleno del Congreso de la República de Guatemala y; el tercero, porque que estos nombramientos no pueden hacerse de manera temporal.
20. Ahora bien la facultad de determinar la configuración y conformación de una Sala de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social como se citó de conformidad con los artículos 103, 157 de la Constitución Política de la Republica; 283, 284 y 301 del Código de Trabajo, es una facultad que requiere de la reforma de una norma ordinaria que es facultad exclusiva del Congreso de la Republica y no de otro órgano del Estado al igual que el

nombramiento de magistrados para el ejercicio de cargos titulares es también facultad del Pleno del Organismo Legislativo.

21. En este caso, la persona de **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** se arrogó la facultad de determinar la estructura de las Salas Primera y Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social incorporando a las mismas un cuarto Magistrado Titular a pesar de que el artículo 301 del Código de Trabajo determina que los Magistrados Titulares en cada Sala serán TRES y se arrogó también la facultad de nombrarles a pesar de que la función de nombrar Magistrados Titulares de las Salas de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social es una facultad que corresponde al Congreso de la República de Guatemala.
22. La falta de honorabilidad de la persona de **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** que se encuentra documentada en la: a) Copia simple de la Providencia 096-2017 de fecha 6 de abril del año 2017 suscrita por el Doctor Rony Eulalio López Contreras en su calidad de Secretario de la Corte Suprema de Justicia. b) Copia simple del Documento identificado como Re: CAP-OFI-193-2017 de fecha 31 de marzo de 2017 suscrito por la Abogada Brenda Cristina Paz Peláez en su calidad de Coordinadora de Agenda de Pleno Secretaría de la Corte Suprema de Justicia. c) Copia simple del Documento identificado como Prov. 092-2017 de fecha 30 de marzo del año 2017 suscrito por Rony Eulalio López Contreras en su calidad de Secretario de la Corte Suprema de Justicia. d) Copia simple del Documento identificado como OF. 354-2017 KSALAZAR de fecha 29 de marzo de 2017 suscrito por la Licenciada Débora Greace Avila Chacón como Coordinadora Unidad de Información Pública Organismo Judicial que se adjuntan a este memorial y esta no puede ser obviada por esa Comisión y en consecuencia dicha persona no puede ser incluida en la Nómina para ocupar el cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia para el período 2019-2024.
23. Ahora bien, más allá de que los actos ejecutados por la persona de **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** sean encuadrables en los tipos penales de RESOLUCIONES VIOLATORIAS A LA CONSTITUCIÓN contenido en el artículo 423 del Código Penal, NOMBRAMIENTOS ILEGALES tipificado en el artículo 432 del Código Penal y USURPACIÓN DE ATRIBUCIONES contenido en el artículo 433 del Código Penal cuestiones por las que ya ha sido denunciada penalmente el presente impedimento por falta de honorabilidad para ser incluida en la Nómina de candidatos para ocupar el cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia para el período 2019-2024 si bien produce la obligación de los funcionarios públicos de esa Comisión relativos al deber de denuncia contenido en el artículo 298 del Código Procesal Penal no implican violación del derecho defensa, de la presunción de inocencia ni una usurpación de las funciones jurisdiccionales en virtud de que este procedimiento tiene como único objeto determinar la idoneidad de los aspirantes con base a pruebas fehacientes que permitan establecer si su imparcialidad está comprometida y si cumple con los requisitos exigidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley de Probidad, Ley del Organismo Judicial y los convenios internacionales aceptados y ratificados con Guatemala relacionados con el tema y esa Comisión no tiene facultades para actuar en ejercicio de una función jurisdiccional, sino simplemente valorando, en acatamiento de lo dispuesto constitucionalmente en este caso la falta de honorabilidad de **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** la cual ha sido ampliamente documentada.
24. Sobre este aspecto ya se ha pronunciado la Corte de Constitucionalidad en la Opinión consultiva de fecha 7 de octubre de 2009, dentro del Expediente Número 3755-2009.

### **III. ACREDITACIÓN DE LA FALTA DE HONORABILIDAD DE LA PERSONA DE VITALINA ORELLANA Y ORELLANA**

1. Copia simple de la Providencia 096-2017 de fecha 6 de abril del año 2017 suscrita por el Doctor Rony Eulalio López Contreras en su calidad de Secretario de la Corte Suprema de Justicia, que se adjunta a este memorial.
2. Copia simple del Documento identificado como Re: CAP-OFI-193-2017 de fecha 31 de marzo de 2017 suscrito por la Abogada Brenda Cristina Paz Pelaez en su calidad de Coordinadora de Agenda de Pleno Secretaría de la Corte Suprema de Justicia que se adjunta a este memorial.

3. Copia simple del Documento identificado como Prov. 092-2017 de fecha 30 de marzo del año 2017 suscrito por Rony Eulalio López Contreras en su calidad de Secretario de la Corte Suprema de Justicia que se adjunta a este memorial.
4. Copia simple del Documento identificado como OF. 354-2017 KSALAZAR de fecha 29 de marzo de 2017 suscrito por la Licenciada Débora Greace Avila Chacón como Coordinadora Unidad de Información Pública Organismo Judicial que se adjunta a este memorial.

#### **IV. DOCUMENTOS QUE PUEDEN SER REQUERIDOS POR ESA COMISIÓN SI A PESAR DE LAS ACREDITACIONES PRESENTADAS LO CONSIDERA NECESARIO**

1. Certificación del Acta 72-2016 de fecha 23 de noviembre del año 2016 que deberá ser requerida a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia ubicada en la 21 Calle 7-70 de la Zona 1, Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala.
2. Certificación de todo documento relacionado con el nombramiento, pago de salarios y prestaciones de las Magistradas de apoyo NIDIA VIOLETA DOMÍNGUEZ TZUNUM y AURA NELLY GARCÍA DE LEÓN que deberá ser requerido a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia y al Director de Recursos Humanos o quien haga sus veces de la Corte Suprema de Justicia ubicada en la 21 Calle 7-70 de la Zona 1, Centro Cívico de la Ciudad de Guatemala.
3. Certificación del acta de toma de posesión como Magistradas de Apoyo NIDIA VIOLETA DOMÍNGUEZ TZUNUM y AURA NELLY GARCÍA DE LEÓN que deberá ser requerida a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social y de la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social que puede ser notificada en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Laboral ubicado en el Boulevard Los Próceres 18-29 zona 10 de la Ciudad de Guatemala.

#### **V. SOLICITAMOS**

1. Que se tenga por presentado este memorial y documentos adjuntos y se inicie el expediente respectivo.
2. Se tome nota del lugar que señalamos para recibir notificaciones.
3. Se tenga por puesto en conocimiento de esa Comisión **IMPEDIMENTO POR FALTA DE HONORABILIDAD PARA SER INCLUIDA EN LA NÓMINA DE CANDIDATOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA PARA EL PERÍODO 2019-2024 A LA PERSONA DE VITALINA ORELLANA Y ORELLANA.**
4. Se procedan a conocer los hechos puestos en conocimiento de esa Comisión relativos al impedimento por falta de honorabilidad para ser incluida en la Nómina de candidatos para ocupar el cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia para el período 2019-2024 de la persona de **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** los cuales se encuentran plena y fehacientemente documentados.
5. Se excluya a la persona de **VITALINA ORELLANA Y ORELLANA** de la Nómina de candidatos para ocupar el cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia para el período 2019-2024 por carecer de honorabilidad.

Guatemala, 3 de febrero de 2020.

ORIGINAL Y UNA COPIA DEL PRESENTE MEMORIAL, DOCUMENTO ADJUNTO, COPIA DEL DPI DE LOS COMPARECIENTES Y DVD CONTENIENDO EN ARCHIVO PDF LA PRESENTE COMUNICACIÓN Y DOCUMENTOS ADJUNTOS.



JOSE ORLANDO VELÁSQUEZ FUENTES



MARCO VINICIO MENDEZ LÓPEZ



*Secretaría de la Corte Suprema de Justicia*  
*Guatemala, C.A.*

Prov. 096-2017

**SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:** Guatemala, seis de abril  
del año dos mil diecisiete.-----

**ASUNTO:** ADJUNTO CAP-OFI-193-2017  
DE LA COORDINACION DE AGENDAS  
DE PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE  
JUSTICIA, DONDE INFORMAN LO  
SOLICITADO EN OFICIO No. 354-2017.

Pase atentamente a **UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL  
ORGANISMO JUDICIAL**, para que se proceda a lo que corresponda.

  
**DR. RONY EULALIO LÓPEZ CONTRERAS**  
**SECRETARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**



Consta: 04 folios más la presente.

06 ABR 2017

8/25  
R



*Secretaría de la Corte Suprema de Justicia*  
*Guatemala, C.A.*

Ref: CAP-OFI-193-2017

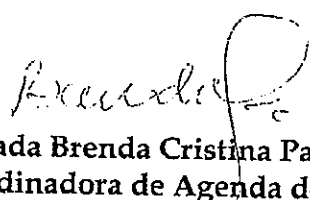
Guatemala, 31 de marzo de 2017

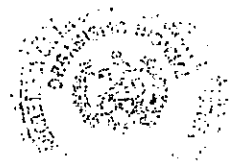
Doctor  
**Rony Eulalio López Contreras**  
Secretario de la Corte Suprema de Justicia  
Su Despacho.

Estimado Doctor:

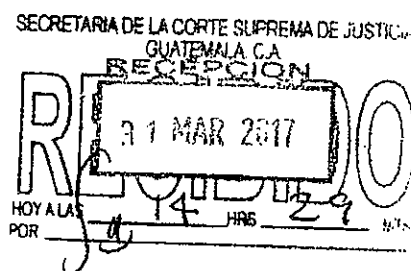
De manera atenta, en respuesta a la Providencia 92-2017, por medio de la cual remite Oficio 354-2017 KSALAZAR, de la Unidad de Información Pública, me permito adjuntar al presente, punto de acta del Pleno de la Corte Suprema de Justicia en donde obra la designación de las Magistradas de Apoyo de las Salas Primera y Segunda de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, como fue solicitado, a excepción de la Sala Tercera de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social que no cuenta con Magistrado de Apoyo designado.

Sin otro particular me suscribo,

  
**Abogada Brenda Cristina Pac Peláez**  
**Coordinadora de Agenda de Pleno**  
**Secretaria de la Corte Suprema de Justicia**



/Hacc







Acta 72-2016. En la ciudad de Guatemala, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis... **DÉCIMO SÉPTIMO. ASUNTO: PUNTOS VARIOS...** 2. ...esta Corte **resuelve:** Realizar las siguientes designaciones temporales y hasta que se finalice el presente Período Constitucional de Magistrados Suplentes de las Salas de la Corte de Apelaciones en los cargos de Magistrados de Apoyo y en las Salas ya designadas, con ello se vela por el cabal cumplimiento a los principios rectores de Imparcialidad, Independencia y Juez Natural en las Salas correspondientes: ...V. Designar temporalmente del uno de febrero de dos mil diecisiete al doce de octubre de dos mil diecinueve a la abogada **NIDIA VIOLETA DOMÍNGUEZ TZUNUM**, Magistrada Suplente de la Sala de la Corte de Apelaciones, como Magistrada de Apoyo para la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La abogada Nidia Violeta Domínguez Tzunum, deberá presentar a la Cámara correspondiente, para que sea conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, informe del trabajo desarrollado cada seis meses de su gestión y al finalizar la presente designación con el visto bueno del Presidente de la Sala. La presente designación temporal se realiza con fundamento en el artículo veintisiete del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, Acuerdo número treinta y uno - dos mil, de la Corte Suprema de Justicia. VI. Designar temporalmente del uno de febrero de dos mil diecisiete al doce de octubre de dos mil diecinueve, a la abogada **AURA NELLY GARCÍA DE LEÓN**, Magistrada Suplente de la Sala de la Corte de Apelaciones, como Magistrada de Apoyo para la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La abogada Aura Nelly García De León, deberá presentar a la Cámara correspondiente, para que sea conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, informe del trabajo desarrollado cada seis meses de su gestión y al finalizar la presente designación con el visto bueno del Presidente de la Sala. La presente designación temporal se realiza con fundamento en el artículo veintisiete del Reglamento General de la Ley de Servicio Civil del Organismo Judicial, Acuerdo número treinta y uno - dos mil, de la Corte Suprema de Justicia.



3

*Secretaría de la Corte Suprema de Justicia*  
Guatemala, C.A.

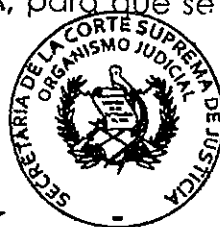
Prov. 092-2017

**SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA:** Guatemala, treinta de marzo del año dos mil diecisiete.-----


**ASUNTO:** ADJUNTO OFICIO No. 354-2017 KSALAZAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ORGANISMO JUDICIAL, SOLICITUD No. 551-2017 DONDE SOLICITAN ACUERDO, RESOLUCION, ACTA, RAZON O DOCUMENTO DONDE OBRA EL NOMBRAMIENTO DE LOS MAGISTRADOS DE APOYO DE LAS SALAS 1ra., 2da., Y 3ra. DE APELACIONES DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL.

Pase atentamente a **COORDINACIÓN DE AGENDA DE PLENO DE LA SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**, para que se proceda a lo que corresponda.

  
**DR. RONY EULALIO LÓPEZ CONTRERAS**  
**SECRETARIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA**



Consta: 1 folio más la presente.

  
KS:03  
30/05/2017





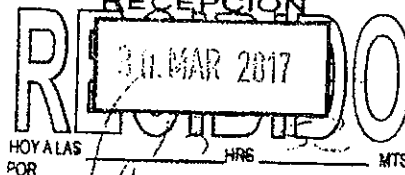
Unidad de Información Pública

SEGÚN ACUERDO NO. 37/099  
DE LA PRESIDENCIA DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SECRETARÍA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

GUATEMALA, C.A.

RECEPCIÓN



OF. 354-2017 KSALAZAR  
Guatemala, 29 de marzo del 2017

Doctor  
Rony Eulalio López Contreras  
Secretaría de la Corte Suprema de Justicia  
Su despacho,

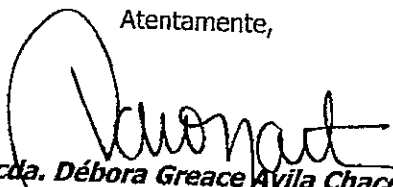
Por este medio me dirijo a usted para solicitarle de la manera mas atenta se sirva proporcionar a esta Unidad, la información que a continuación **se transcribe**:

"Acuerdo, resolución, acta, razón o documento en donde obra el nombramiento realizado de los Magistrados de Apoyo de las Salas Primera, Segunda y Tercera de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social que se encuentran actualmente en dichos cargos."

Dicho requerimiento se hace en virtud de la solicitud 551- 2017 de información pública presentada ante esta Unidad, por lo que la dependencia a su cargo deberá proporcionar a esta oficina la información arriba mencionada, debidamente foliada, sellada y rubricada por el responsable de la misma; en el plazo de seis días a partir de recibida la presente, tal como lo establece la Circular 006/REHG/Ir, de la Presidencia del Organismo Judicial.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

  
**Licda. Débora Greace Avila Chacón**  
**Coordinadora Unidad de Información Pública**  
**Organismo Judicial**

Circular No. 43/2013/JRFG/elm Secretaría General de la Presidencia. "... toda información remitida a la Unidad de Información Pública del Organismo Judicial -UNIP-, deberá ser debidamente confrontada y verificada con los registros respectivos, para que sea fidedigna y apegada a las normativas vigentes.", la Unidad de Información Pública de acuerdo a sus funciones funge únicamente como enlace con las dependencias que conforman el Organismo Judicial, por lo que el contenido de la información que remitan es responsabilidad exclusiva del funcionario que la genera.











